



Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Distr.
GENERAL

HRI/CORE/1/Add.44
27 de junio de 1994

ESPAÑOL
Original : INGLÉS

DOCUMENTO BASICO QUE FORMA PARTE DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES

AUSTRALIA

[19 de abril de 1994]

INDICE

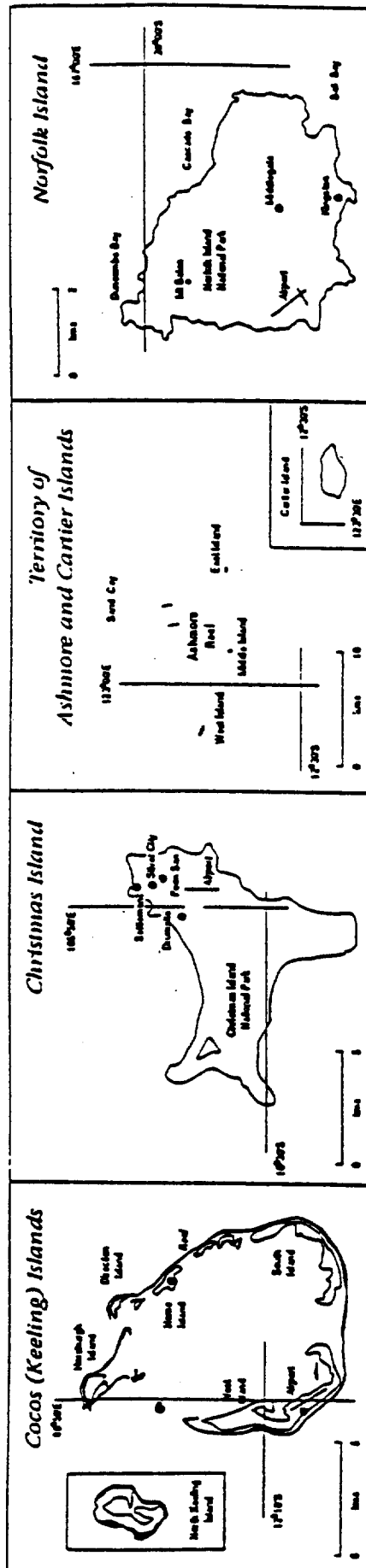
Párrafos

I. TERRITORIO Y POBLACION	1 - 76
A. Panorama general	1
B. Territorio	2 - 6
C. Población	7 - 76
II. ESTRUCTURA POLITICA GENERAL	77 - 165
A. Resumen	77 - 84
B. El sistema federal australiano	85 - 130
C. El sistema de aplicación de la ley en Australia: su naturaleza y sus órganos	131 - 165
III. ESTRUCTURA JURIDICA GENERAL QUE ENMARCA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	166 - 264
A. Resumen	166 - 172
B. Introducción	173 - 174
C. Aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos	175 - 183
D. Procesos institucionalizados existentes	184 - 222
E. Instituciones especializadas sobre derechos humanos	223 - 256
F. Leyes de los Estados y Territorios contra la discriminación y para la igualdad de oportunidades	257 - 260
G. Organizaciones no gubernamentales	261
H. Mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos	262 - 264
IV. INFORMACION Y PUBLICIDAD	265 - 276
A. Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades	265 - 269
B. Formulación de informes	270 - 275
C. Organismos de los Estados y Territorios contra la discriminación y para la igualdad de oportunidades	276

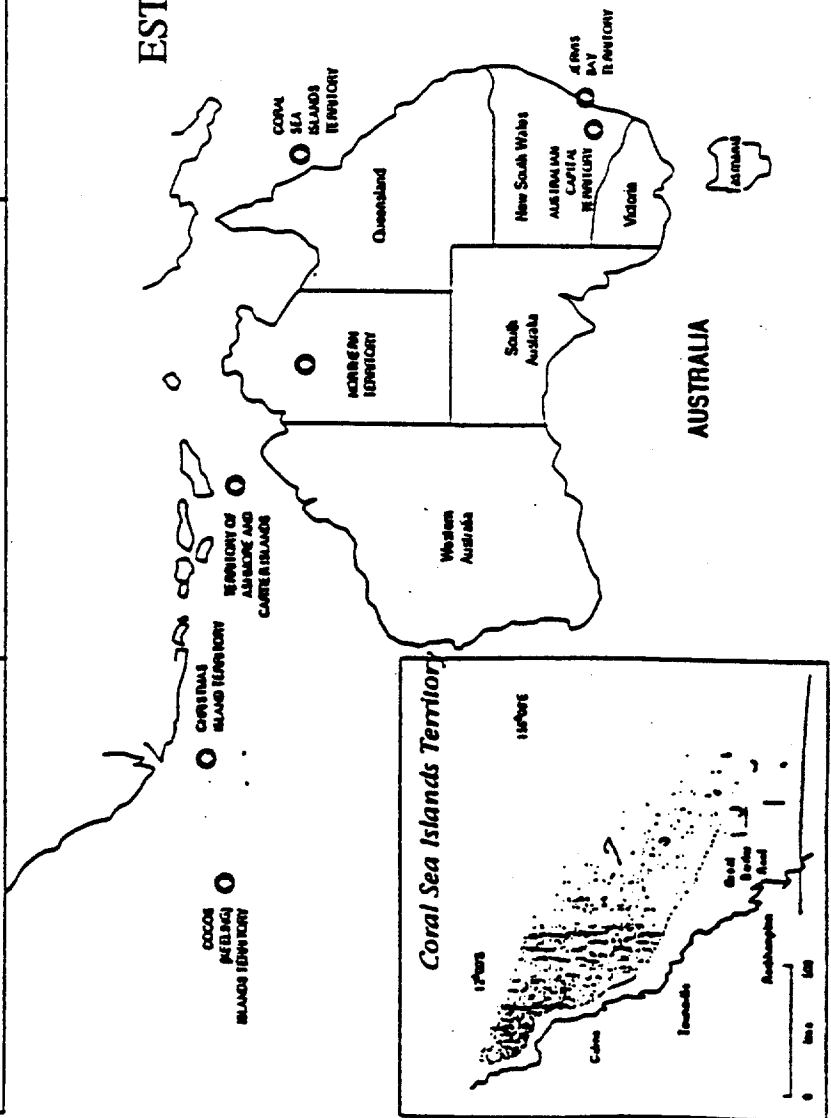
Anexo: Organismos de Derechos Humanos Federales y de los Estados
y Territorios de Australia

Estados y Territorios interiores de Australia





AUSTRALIA ESTADOS Y TERRITORIOS EXTERIORES



I. TERRITORIO Y POBLACION

A. Panorama general

1. A continuación se presenta un panorama estadístico general del territorio, la población y la economía de Australia:

Territorio:

Superficie (kilómetros cuadrados)	7 682 300
Longitud de la costa (km)	36 735
Porcentajes de la superficie total:	
- Zona tropical	39
- Zona templada	61

Población

- Población al 30 de septiembre de 1992	17 581 000
- Porcentaje de población urbana en 1991 (ciudades de más de 100.000 habitantes)	63
- Habitantes por kilómetro cuadrado	2,3
- Población de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres (1991)	265 378
- Porcentaje de la población total	1,6
- Población de las capitales de los Estados y Territorios (1991):	
- Sydney	3 097 954
- Melbourne	2 761 996
- Brisbane	1 145 542
- Perth	1 018 702
- Adelaide	957 480
- Canberra	299 888
- Hobart	126 306
- Darwin	67 946
- Porcentaje de la población nacida en ultramar (1991)	22,3
- Porcentaje de la población que habla en su hogar un idioma distinto del inglés (1991; personas de 5 años de edad o más)	17,4
- Porcentaje estimado de los habitantes de 5 años de edad o más que son totalmente incapaces de hablar en inglés	0,4
- Porcentaje estimado de la población adulta que es incapaz de cumplir las tareas cotidianas de lectura y escritura en inglés	10,0
- Porcentajes de adhesión de la población a las distintas religiones (1991):	
- Cristianos	74,0
- No cristianos	2,6
- Otros	23,4

-	Esperanza de vida al nacer (1991):	
-	Varones	74,35
-	Mujeres	80,29
-	Tasa de fecundidad total (1991)	1,85
-	Tasa de mortalidad infantil (1991)	
-	Varones	7,9
-	Mujeres	6,3
-	Tasa de mortalidad derivada de la maternidad por cada 100.000 nacimientos (1988-1990)	5,4
-	Porcentaje de la población menor de 15 años (30 de junio de 1992)	21,83
-	Porcentaje de la población de 65 años de edad o más (30 de junio de 1992)	11,36

Economía

-	Producto interno bruto per cápita (1991/92)	\$A 22 088
-	Producto interno bruto de 1988 a 1992 (porcentaje de crecimiento anual medio, a precios de 1989-1990)	2,2%
-	Inflación de 1992	0,3%
-	Tasa media anual de desempleo (1992)	10,8%
-	Deuda externa neta (en miles de millones de dólares australianos, en 1992)	155,5
-	Dólares australianos por dólar de los EE.UU. (promedio de los valores diarios de 1992)	1,360

B. Territorio

2. Australia comprende una superficie terrestre de 7.682.300 kilómetros cuadrados. El cuadro que sigue muestra la superficie de Australia en comparación con la de otros países:

País	Superficie en miles de kilómetros cuadrados
Australia	7 682
China	9 590
Japón	372
Reino Unido	244
Estados Unidos de América	9 636

3. El continente insular de Australia presenta una variada gama de zonas climáticas que van desde las regiones tropicales del Norte hasta las regiones templadas del Sur, pasando por las vastas extensiones áridas de su interior.

4. La masa terrestre, conocida generalmente como "Continente Seco", es relativamente árida: un 80% de su área recibe precipitaciones inferiores a 600 mm por año y en un 50% se registran menos de 300 mm. Las zonas que reciben más precipitaciones están concentradas en la parte oriental del continente, sobre todo en la región ribereña, junto con algunas limitadas superficies de la costa occidental. Las variaciones estacionales pueden ser grandes, con temperaturas que oscilan entre más de 50°C hasta bastante por debajo de cero. Sin embargo, las temperaturas mínimas extremas no son tan bajas como en otros continentes, no sólo por efecto de la latitud, sino también por la falta de grandes masas montañosas y debido a la extensión de los océanos circundantes.

5. Aunque el clima puede calificarse como predominantemente continental, la naturaleza insular de la masa terrestre altera las características continentales generales.

6. Australia puede ser víctima de toda clase de catástrofes naturales, sobre todo las sequías, inundaciones, ciclones tropicales, grandes tormentas e incendios.

C. Población

7. La principal fuente de los datos demográficos utilizados en este informe es el censo de 1991. Cuando pudo contarse con datos más recientes, se hizo uso de ellos. El censo se lleva a cabo con intervalos de cinco años. El último censo de Australia se efectuó el 6 de agosto de 1991. En el cuadro que sigue se indica la población de Australia:

Población residente estimada de Australia, por Estados y Territorios,
al 30 de septiembre de 1992 (en miles de habitantes)

	Varones	Mujeres	Total
Nueva Gales del Sur	2 980,3	3 008,8	5 989,1
Victoria	2 212,9	2 252,3	4 465,2
Queensland	1 531,2	1 525,7	3 057,0
Australia Occidental	838,9	830,9	1 669,8
Australia del Sur	724,7	736,5	1 461,2
Tasmania	234,0	237,7	471,7
Territorio de la Capital de Australia	148,7	149,0	297,7
Territorio del Norte	88,8	80,5	169,2
Total	8 759,5	8 821,5	17 581,0

8. La tasa media de crecimiento demográfico anual de Australia entre junio de 1989 y junio de 1992 fue del 1,42%. La relación entre los sexos en junio de 1992 era de 99,3 varones por cada 100 mujeres. Las mujeres superaban en número a los varones en el tramo de edades de 35 a 39 años y a partir de los 60.

9. La población de Australia se duplicó con creces en los últimos 45 años, y la inmigración dio origen aproximadamente a un 40% del aumento.

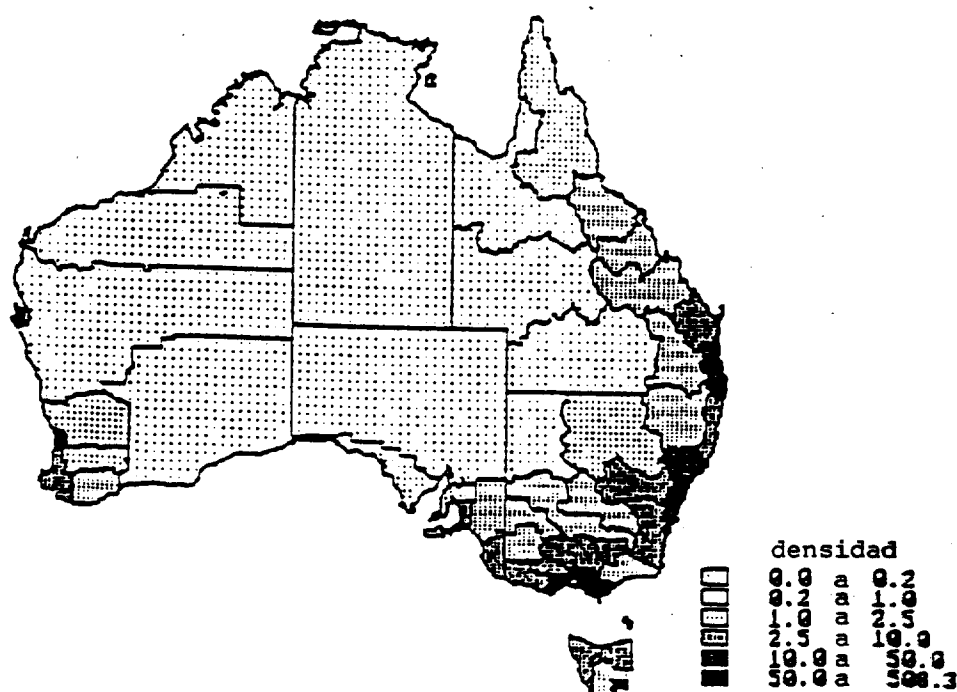
10. La mayor parte de la población australiana está concentrada en dos regiones ribereñas muy separadas entre sí. La mayor de ellas, con gran ventaja en superficie y población, se encuentra en la región sudoriental, que se extiende ininterrumpidamente en una media luna desde Australia del Sur por Victoria, Tasmania y Nueva Gales del Sur hasta Queensland. La menor de las dos regiones se encuentra en la parte sudoccidental de Australia Occidental. Ninguna de estas dos regiones se extiende nunca tierra adentro más de 200 ó 300 kilómetros. Están separadas por 2.000 a 3.000 kilómetros de territorio escasamente poblado que representa aproximadamente tres cuartas partes de la superficie total. Esta última parte comprende la totalidad del Territorio del Norte y partes de los cinco Estados continentales restantes.

11. En ambas regiones ribereñas la población se concentra, además, en las capitales y otras ciudades. En 1991, el 63% de la población de Australia vivía en las capitales de los Estados y Territorios (incluida la capital nacional) y en otras seis grandes ciudades de más de 100.000 habitantes (véase el cuadro). La densidad de población muy baja de Australia (dos habitantes por kilómetro cuadrado) disimula esta característica de la distribución demográfica.

Distribución de la población urbana y rural (censo de 1991)

Tamaño	Población	Porcentaje de la población total
Centros urbanos de más de 100.000 habitantes	10 562 554	63
De 1.000 to 99.999 habitantes	3 775 305	22
Población rural	2 500 206	15
Total	16 838 065	100

Densidad de población de Australia, por divisiones estadísticas (habitantes por kilómetro cuadrado, censo de 1986)



12. El cuadro siguiente indica la población aborígen y de isleños del Estrecho de Torres:

Población aborígen y de isleños del Estrecho de Torres (censo de 1991)			
	Varones	Mujeres	Total
Población aborígen	118 212	120 445	238 657
Isleños del Estrecho de Torres	13 392	13 329	26 721
Total	131 604	133 774	265 378

13. Las poblaciones aborígenes han habitado Australia durante 40.000 años como mínimo. Se considera en general que llegaron a Australia del Sudeste del continente asiático por una cadena de islas que existió durante la última glaciación. No se conoce con exactitud el volumen de la población aborígen precolonial, pero las estimaciones oscilan entre 300.000 habitantes y más de un millón.

14. Los isleños del Estrecho de Torres son la otra población indígena de Australia. Aunque a menudo se les agrupa con la población aborígen, tienen su cultura, sus tradiciones y su historia propias. Su tierra ancestral se encuentra en las islas situadas entre el extremo de Queensland, el Cabo York, y Papua Nueva Guinea.

15. Se ignora desde cuándo existen habitantes en el Estrecho de Torres, pero no cabe duda de que las islas estaban habitadas cuando llegaron a ellas los primeros europeos -la expedición española de Torres- que la visitaron en 1606. La cultura y el modo de vida de los isleños del Estrecho de Torres sugieren vinculación con la población de las costas cercanas de Papua. Los habitantes de las islas situadas más allá del Cabo York tenían contactos regulares con sus vecinos aborígenes.

16. Las poblaciones aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres tenían una vida cultural desarrollada, en la que los habitantes de cada zona correspondían en lo esencial a distintos grupos lingüísticos y tenían formas tradicionales de propiedad de la tierra.

17. Menos del 25% de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres vivían en ciudades de más de 100.000 habitantes. La tercera parte de ellos habitaban zonas rurales, lo que representa una concentración rural que duplica con creces a la del conjunto de la población. La población indígena del propio Estrecho de Torres alcanzaba a 4.600 habitantes, cuya gran mayoría eran isleños del Estrecho de Torres. Esto significa que sólo un 16%, aproximadamente, de los isleños del Estrecho de Torres viven actualmente en el Estrecho.

18. En 1991, la población de Australia era de 16.850.334 habitantes. La distribución por sexos correspondía a 98,6 varones por cada 100 mujeres. Las mujeres superaban en número a los varones en el tramo comprendido entre los 25 y 39 años de edad, y de los 60 años en adelante. La ventaja de las mujeres se acentuaba en los segmentos de edad avanzada, y la diferencia se intensificaba

con la edad. Por su mayor longevidad, las mujeres tienen mayor probabilidad de enviudar, de vivir solas y de pasar su edad avanzada en centros de atención. En 1991, el 58% de las personas que vivían solas eran mujeres.

19. El número de familias que están a cargo de mujeres es difícil de determinar porque los datos censales no indican con claridad quién es el jefe de las familias en que existen parejas. En 1991, el 9% de las familias de Australia estaban a cargo de un solo progenitor. Se trataba de una mujer en el 87% de esos casos.

20. De las personas relevadas en el censo de 1991, más de la quinta parte (cerca de 4 millones de personas) habían nacido en ultramar. Más de un millón de ellos habían nacido en el Reino Unido e Irlanda y ese grupo, que representaba un 31% de los nacidos en ultramar, era con gran ventaja el mayor de todos. Globalmente, el 61% de las personas nacidas en ultramar habían nacido en Europa. Otro 18% había nacido en Asia, y de ellos el grupo mayor había nacido en Viet Nam. En el cuadro que sigue se indica el porcentaje de habitantes nacidos en ultramar y su lugar de nacimiento:

Porcentaje de la población nacida en ultramar		
Censo	Población censada	Porcentaje de los nacidos en ultramar
1971	12 755 638	20,2
1976	13 548 448	20,1
1981	14 576 330	20,9
1986	15 602 156	20,8
1991	16 850 334	22,3

Lugares de nacimiento (regiones)				
	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
Oceanía y Antártida				
Australia	6 276 914	6 448 253	12 725 167	75,5
Otros lugares	175 994	175 184	351 178	2,1
Total	6 452 908	6 623 437	13 076 345	77,6
Europa y URSS				
Europa y URSS (sin definición más precisa)	339	300	639	0,0
Reino Unido e Irlanda	589 710	585 133	1 174 843	7,0
Europa meridional	350 062	312 503	662 565	3,9
Europa occidental	135 268	128 638	263 906	1,6
Europa septentrional	14 614	12 715	27 329	0,2
Europa oriental	66 997	59 966	126 963	0,8
URSS y Estados bálticos	21 132	23 396	44 528	0,3
Total	1 178 122	1 122 651	2 300 773	13,7
Oriente Medio y Africa septentrional				
Oriente Medio	71 015	63 231	134 246	0,8
Africa septentrional	19 705	18 413	38 118	0,2
Total	90 720	81 644	172 364	1,0
Asia sudoriental	176 762	200 989	377 751	2,2
Asia nororiental	98 103	101 185	199 288	1,2
Asia meridional	56 587	54 224	110 811	0,7
América del Norte	38 132	37 037	75 169	0,4
América del Sur, Central y Caribe	35 037	36 920	71 957	0,4
Africa (excepto Africa septentrional)	47 227	47 203	94 430	0,6
Otros países	1 594	1 591	3 185	0,0
Sin indicación	188 575	180 336	368 911	2,2
Total	8 363 767	8 487 217	16 850 984	100,0

Carácter multicultural de Australia

21. La política de inmigración no discriminatoria de Australia dio lugar a una sociedad variada en la que conviven pueblos de diversos orígenes étnicos y raciales que comparten su apego al idioma, las leyes, las instituciones y los intereses de Australia.

22. La política oficial de multiculturalismo está fundada en tres principios:

- Identidad cultural: el derecho de todos los australianos dentro de límites cuidadosamente definidos, como el imperio de la ley y la democracia parlamentaria, de expresar y compartir su patrimonio cultural propio, incluyendo su idioma y su religión;
- Justicia social: el derecho de todos los australianos a la igualdad de trato y de oportunidades, y la eliminación de los obstáculos

fundados en la raza, el origen étnico, la cultura, la religión, el idioma, el sexo o el lugar de nacimiento;

- Eficiencia económica: la necesidad de mantener, desarrollar y aprovechar eficazmente las dotes y talentos de todos los australianos con prescindencia de su origen.

23. El multiculturalismo acepta el aporte de todas las culturas a Australia pero no constituye una política de estímulo al separatismo étnico o cultural. Es una política destinada a asegurar a todos los australianos, incluidos los habitantes originales, los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, y los descendientes de todos los inmigrantes posteriores, la oportunidad de participar plenamente en la sociedad australiana y de contribuir a ella.

24. Como política oficial, el multiculturalismo abarca las medidas gubernamentales destinadas a responder a la diversidad cultural y étnica de la Australia contemporánea. El Gobierno Federal y algunos de los gobiernos de los Estados han adoptado medidas de igualdad de acceso y equidad destinadas a asegurar que todos los residentes de Australia disfruten de acceso en condiciones de igualdad a los recursos que el Estado administra en nombre de la comunidad. El propósito de la estrategia de igualdad de acceso y equidad es la eliminación de los obstáculos fundados en la raza, el idioma, la religión o la cultura en la formulación de las medidas oficiales, la elaboración de los programas y la prestación de los servicios. Entre las medidas que actualmente rigen para contribuir al logro de este objetivo figura la difusión de informaciones en idiomas distintos del inglés, el servicio de interpretación telefónica, la capacitación de los funcionarios públicos de distintas culturas y las consultas con las comunidades.

25. La estrategia contribuye también al propósito oficial de fortalecer la cohesión social entre los diversos componentes de la comunidad australiana y estimular las relaciones armoniosas entre las distintas comunidades. Se aplican con ese fin medidas para facilitar la comunicación y la colaboración entre las autoridades y la comunidad.

Refugiados

26. Australia, junto con otros signatarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, apoya el criterio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de favorecer las soluciones duraderas o de largo plazo para los refugiados.

27. El Gobierno de Australia determina cada año el volumen del programa nacional en materia de ingresos de refugiados y por razones humanitarias. El programa para 1991/92 fue de 12.000 plazas. Para 1992/93, la cifra de planificación se estableció en 10.000 plazas, pero fue aumentada posteriormente a 12.000 respondiendo a las mayores necesidades humanitarias y a la revisión de las necesidades de reasentamiento para 1993 efectuada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

28. El programa humanitario y de refugiados ha sido separado recientemente del programa de inmigración a fin de asegurar que las consideraciones internacionales y humanitarias puedan equilibrarse con las de orden económico y social interno que orientan la elaboración del programa de inmigración.

29. En 1991/92 llegaron a Australia 7.157 personas conforme al programa humanitario y de refugiados (3.999 varones y 3,158 mujeres). La mayoría provenían de Asia sudoriental y el Oriente Medio. También figuraban cantidades importantes provenientes de América Central y de Asia meridional. Los principales países de origen eran El Salvador [1.096], el Iraq [1.069] y Viet Nam [1.044]. En el cuadro que sigue se indica el país de origen de los refugiados:

Región de nacimiento de las personas ingresadas en virtud del programa humanitario Ejercicio financiero 1991/92		
Región o país de nacimiento	Cantidad	Porcentaje
Oceanía	1	0,0
Europa y antigua URSS	548	7,7
Oriente Medio y Africa septentrional	1 898	26,5
Asia sudoriental	2 000	27,9
Asia nororiental	92	1,3
Asia meridional	1 044	14,6
América del Norte	0	0,0
América del Sur y Central y Caribe	1 260	17,6
Africa (excepto Africa septentrional)	311	4,3
Sin determinar	3	0,0
Total	7 157	100,0

Idioma

30. El inglés australiano es el idioma hablado predominantemente en Australia. Sin embargo, en la Política Australiana sobre Idioma y Alfabetización, establecida en agosto de 1991, se reconoce que la vitalidad cultural de Australia constituye también un producto de otros idiomas hablados en la comunidad, entre ellos los idiomas indígenas y de los pobladores aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, así como idiomas europeos y asiáticos.

31. Conforme al censo de 1991 había más de dos millones y medio de personas, equivalentes aproximadamente al 17,4% de los habitantes de más de cinco años de edad, que hablaban en sus hogares idiomas distintos del inglés. Figuraba en primer lugar el italiano, hablado por más de 409,247 personas, seguido por el griego (274,999) y después los idiomas chinos, el vietnamita, el alemán y el árabe/libanés, cada uno de ellos hablado por más 100.000 personas. El cuadro que sigue presenta un desglose detallado:

Población que habla en su hogar idiomas distintos del inglés (1991, con exclusión de los menores de cinco años)				
Idioma	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje de la población
Idiomas aborígenes	20 329	20 617	40 946	0,3
Arabe, incluido el libanés	76 413	70 965	147 378	0,9
Idiomas chinos*	126 244	124 985	251 229	1,6
Croata	31 414	29 375	60 789	0,4
Neerlandés	22 294	25 300	47 594	0,3
Francés	22 149	23 533	45 682	0,3
Alemán	56 423	58 941	115 364	0,7
Griego	139 079	135 920	274 999	1,8
Italiano	207 205	202 042	409 247	2,6
Macedonio	31 392	30 015	61 407	0,4
Maltés	26 383	25 588	51 971	0,3
Polaco	30 675	34 027	64 702	0,4
Serbio	11 964	11 172	23 136	0,1
Español	42 436	43 850	86 286	0,6
Turco	19 561	18 440	38 001	0,2
Vietnamita	54 022	48 040	102 062	0,7
Yugoslavo**	21 573	20 745	42 318	0,3
Otros idiomas***	229 672	246 048	475 720	3,1
Sin especificar	189 156	182 149	371 305	2,4
Total				17,4

* Comprende el cantonés, mandarín, chino indicado como tal y otros idiomas chinos no indicados expresamente.

** Comprende el yugoslavo y el serbio-croata.

*** Se incluyen otros idiomas indicados pero no especificados, o descritos inadecuadamente.

Alfabetización

32. Las necesidades de Australia en materia de alfabetización de adultos en inglés fueron objeto de una encuesta nacional realizada en 1989. A partir de ella puede estimarse que por lo menos un 10% de los adultos son incapaces de realizar las tareas cotidianas de lectura y escritura en inglés. De ellos, unos 650.000 provenían de medios de habla inglesa. En 1989 se estimaba que unas 44.000 personas estaban matriculadas en programas de alfabetización de adultos.

33. La Política sobre Idioma y Alfabetización, establecida en Australia en agosto de 1991, asigna más de 333 millones de dólares a medidas y nuevas orientaciones destinadas a abordar estas graves carencias existentes en Australia respecto del inglés y otros idiomas. Los cuatro objetivos fundamentales de esta política son los siguientes:

- Todos los australianos deben desarrollar y conservar una alfabetización eficaz en inglés, que les permita participar en la sociedad australiana;
- Debe ampliarse y mejorarse considerablemente el aprendizaje de idiomas distintos del inglés;

- Los idiomas aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres que aún se transmiten deben conservarse y desarrollarse, y los demás deben registrarse en cuanto corresponda; y
- Deben ampliarse y mejorarse los servicios prestados en materia de idiomas por intérpretes y traductores, la prensa y los medios de difusión electrónicos y las bibliotecas.

34. La nueva política comprende medidas como el empleo de la televisión para la difusión de servicios de alfabetización de adultos, subvenciones especiales a las escuelas para los alumnos superiores que aprendan idiomas prioritarios distintos del inglés, el desarrollo de un plan nacional de estudios de inglés y la organización de la evaluación en materia de alfabetización escolar, una financiación y apoyo más amplios a la alfabetización de adultos, el impulso al inglés como segundo idioma en los programas escolares, nuevos organismos asesores en materia de idiomas y alfabetización y un mayor apoyo a la enseñanza del inglés a los inmigrantes adultos.

35. El Programa de Iniciativas sobre los Idiomas de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres apoya la conservación de los idiomas de las comunidades aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres y las tareas correspondientes de desarrollo, investigación y recuperación.

Religión

36. En todos los censos de Australia se obtuvieron detalles sobre la adhesión a las confesiones religiosas. Sin embargo, a partir del censo de 1933 se ha indicado claramente en los formularios censales que no era obligatorio responder a la pregunta relativa a la religión. En 1991, un 23% de la población se declaró "sin religión" o no dio respuesta a la pregunta.

37. Los datos del censo de 1991 indican que la población de Australia es predominantemente cristiana, y que la mayoría de ella se adhiere a uno de los principales sectores, la Iglesia Católica (27,3%) y la Iglesia Anglicana de Australia (23,9%).

38. Se ha registrado un leve aumento de la proporción de personas de religiones no cristianas, que pasó del 1,4% en 1981 al 2,6% en 1991. En el cuadro que sigue se indica la distribución de la población por religiones:

Distribución de la población por religiones (censo de 1991)				
	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje de la población
Cristianos				
Anglicanos	1 935 173	2 083 597	4 018 770	23,9
Baptistas	132 732	147 188	279 920	1,7
Católicas	2 252 114	2 354 530	4 606 644	27,3
Iglesias de Cristo*	35 014	43 025	78 039	0,5
Testigos de Jehová	33 468	41 083	74 551	0,4
Luteranos	122 144	128 700	250 844	1,5
Ortodoxos	242 957	231 964	474 921	2,8
Pentecostales	70 421	80 244	150 665	0,9
Presbiterianos**	357 480	374 747	732 227	4,3
Ejército de Salvación	32 236	39 748	71 984	0,4
Iglesia de la Unificación	640 644	747 002	1 387 646	8,2
Otras confesiones	160 568	178 865	339 433	2,0
Total	6 014 951	6 450 693	12 465 644	74,0
No cristianos				
Budistas	69 775	70 072	139 847	0,8
Islam	77 958	69 549	147 507	0,9
Judíos	36 099	38 287	74 386	0,4
Otras confesiones	42 966	40 546	83 512	0,5
Total	226 798	218 454	445 252	2,6
Religiones descritas inadecuadamente	26 736	23 117	49 853	0,3
Sin religión***	1 209 830	966 778	2 176 608	12,9
No se indica	883 852	828 470	1 712 322	10,2
Total	8 362 167	8 487 512	16 849 679	100,0

* Se incluyen las Iglesias de Cristo y las Iglesias de Cristo No Sectarias.

** Se incluyen los presbiterianos calificados como tales y los reformados.

*** Incluye a los humanistas y materialistas.

Salud

39. En comparación con otros países, Australia figura entre los de más bajo nivel de mortalidad y mayor esperanza de vida. La tendencia actual conduce a la nivelación de la tasa bruta de mortalidad después de dos decenios de disminución persistente. La reducción de las tasas de mortalidad se debe al permanente mejoramiento de los servicios de atención sanitaria de la comunidad, la conciencia del público respecto de los problemas sanitarios y los progresos de la ciencia y la tecnología médicas.

40. En Australia, como en la mayor parte de los demás países, las mujeres tienen tasas de mortalidad inferiores a la de los varones (véase el cuadro). Las tasas por edades muestran que esa diferencia se verifica en todos los

tramos. El efecto global de esta distinta tasa de mortalidad ha sido un aumento de la proporción de mujeres en los sectores demográficos de mayor edad. Por su mayor longevidad, las mujeres tienen mayor probabilidad de enviudar, de vivir solas y de pasar su edad avanzada en centros de atención.

41. Las tres principales causas de muerte son, en la actualidad, las cardiopatías isquémicas, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares.

42. La esperanza de vida al nacer sigue siendo muy inferior para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres que para el total de la población australiana. Según los datos disponibles, la esperanza general de vida al nacer es de 55,2 años para los varones y de 63,6 para las mujeres.

Esperanza de vida al nacer		
	Varones	Mujeres
1986	72,74	79,20
1987	73,01	79,43
1988	73,05	79,40
1989	73,26	79,49
1990	73,81	79,94
1991	74,35	80,29

43. En 1988, la tasa de fecundidad total alcanzó su nivel más bajo, de 1,84 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes (véase el cuadro). Desde entonces ha ido en aumento, y en 1990 era de 1,90. En 1991, sin embargo, volvió a descender a 1,85.

Tasa de fecundidad	
1986	1,87
1987	1,85
1988	1,84
1989	1,84
1990	1,90
1991	1,85

44. El nivel general de procreación es considerablemente superior entre los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres que en las demás mujeres australianas. La diferencia es evidente en las mujeres de todas las edades, pero particularmente acentuada en los tramos de 15 a 19 y de 20 a 24 años, en los que las tasas de fecundidad de las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres triplica a la del total de las mujeres australianas de las mismas edades.

45. Como puede apreciarse en el cuadro, en 1991 la tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos en Australia era de 7,1 en general: 7,9 para los varones y 6,3 para las mujeres. La diferencia entre las tasas de mortalidad según los sexos se ha reducido apreciablemente, pero la proporción entre ambas se ha mantenido notablemente constante alrededor de 1,3. Para los niños menores de un año era de 7,6 en los varones y 5,9 en las mujeres. En los niños de entre uno y cuatro años era de 0,4 en los varones y 0,3 en las mujeres.

Tasas de mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos)	
1986	8,8
1987	8,7
1988	8,7
1989	8,0
1990	8,2
1991	7,1

46. A nivel internacional, la tasa de mortalidad infantil de Australia figura entre las más bajas, y es comparable con las del Reino Unido y Noruega e inferior a las de Nueva Zelanda, Italia, España y los Estados Unidos. La tasa de Australia es superior a las del Japón, Islandia, Suecia, los Países Bajos y el Canadá.

47. Sin embargo, tratándose de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres la tasa de mortalidad infantil de 1990 fue de 22,5. Las de los niños de hasta cuatro años fueron en 1984-89 de 6,5 para los varones y 5,4 para las mujeres.

48. La tasa de mortalidad derivada de la maternidad en 1988-90 era, en Australia, de 5,4 por cada 100.000. La tasa de mortalidad derivada de la maternidad entre las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, de 28 por cada 100.000, es considerablemente superior a la de la población en general. Se han establecido estrategias para reducir la mortalidad derivada de la maternidad entre las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres en la Estrategia Nacional de Salud para los Aborígenes, el Programa Nacional de Salud de la Mujer, la Nueva Estrategia de Alumbramiento y el Programa de Acción Nacional de Australia correspondiente a la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño. En el cuadro que sigue se indican cifras relativas a la mortalidad vinculada con la maternidad:

<u>Muertes causadas por complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio</u>	
1986	15
1987	13
1988	12
1989	13
1990	16
1991	13

49. Australia tuvo durante 200 años una estructura de edades relativamente juvenil causada por las elevadas tasas de natalidad y los altos niveles de inmigración. En los últimos tiempos, sin embargo, la tendencia ha reflejado la de otros países occidentales que, sin los niveles relativamente altos de inmigración existentes en Australia, han sufrido una declinación de la tasa de natalidad y alcanzado una mayor esperanza de vida.

50. La proporción de la población menor de 20 años se estimaba en 1992 en casi 29,4%, mientras que en 1986 había sido del 31,5%. En estos tramos de

edades los varones superan a las mujeres en una proporción de 95,3 mujeres por cada 100 varones. La proporción de la población de 65 años o más aumentó de 10,6% en 1986 a 11,36% en 1992. Se prevé que alcanzará al 12% para 1996. Esto representa un incremento del 13,2% en un decenio. La edad promedio aumentó de 31,1 años en 1986 a 32,5 en 1991 (véase el cuadro).

Porcentajes de la población de menos de 19 años y de más de 65 años de edad
(población residente estimada)

Tramo de edades en años	Número de personas en 1992			Porcentaje de la población		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
0 - 4	659 273	628 062	1 287 335	3,76	3,58	7,34
5 - 9	658 044	626 870	1 284 914	3,75	3,58	7,33
10 - 14	643 019	612 083	1 255 102	3,67	3,49	7,16
15 - 19	679 716	649 404	1 329 120	3,88	3,70	7,58
65 - 69	325 322	351 209	676 531	1,86	2,00	3,86
70 - 74	239 133	291 978	531 111	1,36	1,67	3,03
75 - 79	161 764	227 982	389 746	0,92	1,30	2,22
80 - 84	88 140	149 681	237 821	0,50	0,85	1,36
85 y más	46 633	109 032	155 665	0,27	0,62	0,89

51. El número de mujeres supera con mucho al de los varones en los tramos de edades avanzadas, y la diferencia se acentúa con la edad. En junio de 1992, la población de 65 años de edad o más incluía a 1.129.882 mujeres. Representaban el 56,8% de la población de esas edades.

52. En 1986, los habitantes de menos de 20 años eran más de la mitad entre los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres mientras que en el conjunto de los australianos eran menos de un tercio. La diferencia de la estructura de edades se acentuaba al máximo en los tramos de los más jóvenes y los más ancianos. La proporción de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres menores de cinco años era del 14%, casi el doble que en la población total. Sólo un 6% tenía más de 54 años de edad, porcentaje que era del 20% en la población total. Esto se debía a la mayor tasa de fecundidad y la menor esperanza de vida de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

Economía

53. Australia figura entre los países más desarrollados del mundo. Sobre la base de las últimas comparaciones disponibles, correspondientes a 1990, el ingreso per cápita de Australia (producto interno bruto (PIB) per cápita) figura en el 13° lugar entre los 24 miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (véase el cuadro). El PIB es la medida oficial de la producción económica que se utiliza en Australia, y equivale al producto nacional bruto (PNB) menos los ingresos netos provenientes del exterior. En

Australia, el valor del PNB ha sido tradicionalmente inferior al PIB, pero no en grado importante.

Producto interno bruto per cápita en 1990
 (en dólares de los EE.UU. respecto de algunos países, a precios medios de la OCDE y sobre la base de la paridad del poder adquisitivo)

Estados Unidos	\$21 449
Alemania	\$18 291
Japón	\$17 634
Francia	\$17 431
Australia	\$15 951
Noruega	\$15 921
Países Bajos	\$15 766
Reino Unido	\$15 720
Nueva Zelanda	\$13 258
Irlanda	\$10 659

54. La estructura de la economía australiana es análoga a la de la mayor parte de los países desarrollados. El sector de los servicios ha adquirido mayor complejidad y volumen hasta convertirse en el principal factor de la producción nacional. La contribución del sector de las manufacturas a la producción nacional sigue siendo importante, con una dedicación cada vez mayor a la exportación. Al mismo tiempo, la agricultura y la minería desempeñan en la economía de Australia una función más importante que en la mayor parte de los países desarrollados, debido a la riqueza natural de las tierras cultivables y a los vastos recursos minerales. El desarrollo de nuevas minas a fines del decenio de 1960 (principalmente de mineral de hierro) acentuó considerablemente la importancia del sector de la minería en la economía de Australia. En el cuadro que sigue se indica el PIB correspondiente a distintas actividades:

Producto interno bruto por actividades
Ejercicio financiero 1991/92
 (porcentajes del total)

Agricultura	4
Minería	5
Manufacturas	15
Construcción	7
Servicios	69

55. La economía de Australia depende mucho del comercio internacional. Las exportaciones de bienes y servicios representaron alrededor del 20% del PIB en el ejercicio financiero 1991/92. Como corresponde a una nación rica en recursos naturales, los productos básicos son una importante fuente de sus ingresos de exportación. Sin embargo, en el decenio de 1980 se produjo una mayor

diversificación de las exportaciones de Australia, con un fuerte crecimiento en las manufacturas y los servicios exportados, en especial a través del turismo.

56. La orientación de los intercambios de Australia ha ido desplazándose cada vez más hacia la región de Asia, como consecuencia de su rápido crecimiento e industrialización y de la orientación cada vez más fuerte de Australia hacia la región. El porcentaje de las exportaciones australianas destinadas a Asia aumentó del 45% en 1979/80 al 57% en 1991-92.

57. En el cuadro que sigue se indica el crecimiento del PIB registrado desde 1961:

Producto interno bruto
(porcentajes de crecimiento anual,
a precios de 1989/90)

1961 a 1965	4,9
1966 a 1970	5,6
1971 a 1975	3,7
1976 a 1980	3,1
1981 a 1985	3,2
1986 a 1990	3,0

58. Los decenios de 1950 y 1960 correspondieron a una época de rápida expansión de la economía de Australia, favorecida por altas tasas de inmigración, un sector de manufacturas en crecimiento, una demanda generalmente fuerte de materias primas como la lana y el trigo y, hacia el fin de ese período, altos índices de crecimiento de las exportaciones de minerales.

59. Como ocurrió en la mayoría de los países industrializados, la difícil adaptación a los súbitos aumentos del precio del petróleo del decenio de 1970 provocó una importante disminución del ritmo de crecimiento económico.

60. El decenio de 1980 comenzó con un crecimiento más intenso, favorecido por la acentuada expansión del sector de los recursos derivada de las expectativas de aumento sostenido del precio mundial de los productos energéticos. Esa previsión no se vio confirmada, lo que junto con la intensificación de las presiones salariales, una grave sequía y la merma de vigor de la economía mundial, condujo a una recesión en 1982/83. Después de ella, la economía australiana creció fuertemente durante un período importante, y en el decenio de 1980 el crecimiento económico del país se situó en quinto lugar entre las naciones de la OCDE.

61. A partir de comienzos de 1983, un Acuerdo de Precios e Ingresos entre el Gobierno Federal y el movimiento sindical ayudó a mejorar los resultados económicos de Australia suministrando un marco equitativo para la contención de los salarios y restableciendo una buena rentabilidad. Hacia fines del decenio de 1980, el alto nivel de rentabilidad de las empresas y el fuerte crecimiento económico influyeron en un nivel sin precedentes de las inversiones de las empresas.

62. En consonancia con las tendencias del crecimiento económico, el PIB per cápita tuvo un crecimiento relativamente alto en el decenio de 1960 y considerablemente menor en el siguiente (véase el cuadro). Las importantes tasas de crecimiento económico alcanzadas durante el decenio de 1980 se relacionaron con un crecimiento persistentemente moderado del PIB per cápita.

Producto interno bruto per cápita
(porcentajes de crecimiento medio anual,
a precio de 1984-85)

1961 a 1965	2,7
1966 a 1970	3,2
1971 a 1975	1,9
1976 a 1980	1,7
1981 a 1985	1,7
1986 a 1990	*1,7

* Precios de 1989-90

63. El PIB per cápita se redujo en 1990 y 1991 (véase el cuadro). El retroceso económico a partir de las altas tasas de crecimiento de fines del decenio anterior se acentuó por una declinación de la relación de intercambio (derivada de las condiciones económicas internacionales desfavorables), una grave sequía y una caída de los valores de activo, que pusieron de manifiesto un exceso de las inversiones en algunos sectores fundamentales de la economía como el de la construcción de edificios de oficinas. A partir de mediados de 1991 se ha registrado una leve recuperación. Como corresponde a las perspectivas de languidez de la economía mundial, se prevé que la recuperación seguirá siendo moderada en comparación con los antecedentes.

Recesión y recuperación de 1991
(porcentaje medio de crecimiento en el año a precios de 1989-90)

Año	PIB total	PIB per cápita
1989	4,7	3,2
1990	1,1	-0,4
1991	-1,1	-2,3
1992	2,0	0,4

64. Como resulta del cuadro, el fuerte crecimiento económico del decenio de 1960 estuvo acompañado de una inflación generalmente baja. En el decenio siguiente, la tasa de inflación de Australia aumentó considerablemente, al igual que en la mayor parte de los países industrializados. La inflación se mantuvo elevada a lo largo del decenio de 1980, superando el 10% en la primera parte del decenio debido a importantes aumentos salariales, antes de reducirse tras la aplicación del Acuerdo de Precios e Ingresos.

Inflación
(porcentajes de crecimiento anual hasta diciembre,
sobre la base del Índice de Precios de Consumo)

Decenio	Tasa media anual
1960	2,5
1970	10,1
1980	8,6
Año civil	Tasa anual
1989	7,8
1990	6,9
1991	1,5
1992	0,3

65. A comienzos del decenio de 1990 se interrumpió en Australia la fuerte inflación anterior. En diciembre de 1992, el índice anual de inflación se había reducido a 0,3%, el porcentaje más bajo registrado desde 1964. Ello derivaba de múltiples factores, entre los que figuraban la contención de los salarios, el efecto de la recesión sobre la demanda interna y las reducciones de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios. Después de tener durante los últimos 20 años un índice de inflación generalmente superior al promedio de la OCDE, Australia presenta ahora una situación a ese respecto mejor que la mayoría de los países industrializados. Es importante en ese sentido que la baja de la inflación ha estado acompañada de una fuerte caída de las expectativas inflacionarias hasta niveles más bajos que nunca, lo que da una base adecuada para que la inflación se mantenga baja en la economía.

66. Los altos índices de crecimiento económico del decenio de 1960 generaron elevadas tasas de crecimiento del empleo y un bajo nivel de la desocupación. En el decenio de 1970 se registró un crecimiento mucho menor del empleo y se acentuó la desocupación, como consecuencia del menor crecimiento económico del país y del aumento del costo real unitario de la mano de obra. En la segunda mitad del decenio de 1980, bajo la influencia del Acuerdo de Precios e Ingresos, hubo un fuerte aumento del empleo y, en especial, del empleo a tiempo parcial. Una característica importante de este período fue el fuerte aumento de la proporción de la población femenina adulta que trabaja o busca empleo. Ello significó que, a pesar del gran aumento de la cantidad de empleos, la desocupación se redujo más lentamente hasta llegar en 1989 a un mínimo aproximado del 5,9%.

67. Más recientemente, la recesión de comienzos del decenio de 1990 se vinculó con una disminución de los empleos y un aumento de la tasa de desocupación al 11%. La disminución del empleo femenino fue menor que la del masculino, porque siguieron aumentando las oportunidades de empleo a tiempo parcial y se redujeron algunos sectores predominantemente masculinos, como las manufacturas y la construcción. Debido a ello, la tasa de desocupación femenina está por primera vez por debajo de la masculina (véase el cuadro).

Crecimiento medio anual del empleo
Tasa media anual de desocupación
 (porcentajes medios anuales)

	Empleo			Desocupación		
	Masculino	Femenino	Total	Masculino	Femenino	Total
1966 a 1970	1,8	4,7	2,7	1,2	3,1	1,8
1971 a 1975	1,0	3,2	1,7	2,1	3,1	1,8
1976 a 1980	1,3	2,0	1,5	4,8	7,6	5,8
1981 a 1985	0,6	2,8	1,5	7,5	7,9	7,3
1986 a 1990	1,9	4,2	2,9	6,9	7,9	7,3
Año civil						
1989	3,5	5,9	4,8	5,7	6,9	6,2
1990	0,9	3,3	1,6	6,7	7,2	6,9
1991	-2,8	-0,9	-1,8	9,9	9,2	9,6
1992	-0,8	0,6	-0,3	11,4	10,0	10,8

68. La Política de Desarrollo del Empleo de los Aborígenes se estableció como consecuencia de las conclusiones del Informe Miller (1985), que comprobó importantes desigualdades en materia de empleo y educación de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en comparación con la población total. El Programa de Capacitación para los Aborígenes se destina a esas personas por intermedio del Servicio de Empleo del Commonwealth mediante el desarrollo de grandes estrategias en materia de empleo con organismos de los sectores público y privado. El Programa está destinado a obtener resultados equitativos desde el punto de vista de la distribución geográfica y la situación de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en materia de empleo, asegurando que abarque toda la gama de ocupaciones. En 1992/93 se asignaron al Programa de Capacitación para los Aborígenes 45.785 millones de dólares.

69. Australia ha sido tradicionalmente importadora neta de capitales, para facilitar el desarrollo de sus ricos recursos naturales a mayor ritmo que el que habría sido posible alcanzar utilizando el ahorro interno como única fuente de inversiones. Australia, en consecuencia, ha tenido tradicionalmente un déficit en cuenta corriente derivado de la utilización de un ingreso neto de capitales para la financiación de las inversiones.

Déficit en cuenta corriente (DCC) y deuda externa neta
(a precios corrientes)

		DCC como porcentaje del PIB	Deuda externa neta como porcentaje del PIB	
<u>Decenio</u>				
1960		2,9	No se dispone de datos	
1970		1,8	*5,2	
1980		4,7	23,6	
<u>Año civil</u>	<u>DCC (en miles de millones de dólares australianos)</u>	<u>Porcentaje del PIB</u>	<u>Deuda externa neta (en miles de millones de dólares australianos)</u>	<u>Porcentaje del PIB</u>
1990	19,2	5,1	136,6	36,2
1991	13,0	3,4	145,0	38,1
1992	14,2	3,6	168,2	42,8

* Los datos disponibles corresponden al período de 1976/77 a 1979/80

70. Durante los decenios de 1960 y 1970, la balanza comercial por mercancías fue generalmente superavitaria mientras que se registraba déficit en los servicios netos, los ingresos netos y las transferencias netas sin contrapartida. Sin embargo, esta situación se modificó en el decenio de 1980, cuando la declinación de la relación de intercambio y la fuerte demanda interna hicieron que el déficit en cuenta corriente no se redujera a menos del 3,4% del PIB. Dejando a un lado los pequeños superávits de 1983/84 y 1987/88, el saldo de los intercambios de mercancías fue deficitario y el mayor costo del servicio de las obligaciones externas acumuladas acentuó el déficit de los ingresos netos.

71. La relación entre la deuda externa neta y el PIB aumentó considerablemente durante el decenio de 1980, lo que correspondió a un fuerte aumento del déficit en cuenta corriente y a la mayor proporción de él financiada mediante créditos en lugar de capitales.

72. El déficit en cuenta corriente se redujo en los últimos años del 6% del PIB en 1989-90 a aproximadamente un 3% en 1991/92, y en este último año hubo superávit en la balanza de bienes y servicios por primera vez desde 1979/80.

73. La política económica ha debido hacer frente a múltiples dificultades en los dos últimos decenios. El de 1970 correspondió a los violentos aumentos del precio del petróleo y la acentuación del desempleo y la inflación. En el decenio de 1980 hubo grandes oscilaciones de la relación de intercambio y los tipos de cambio, aumentó la deuda externa y, más recientemente, se produjo una recesión tras el auge de los valores de activo a fines de ese decenio.

74. Las experiencias de los dos últimos decenios llevaron al reconocimiento de que el mejoramiento sostenido del nivel de vida exige una política económica fijada en gran medida con perspectiva de mediano plazo, que contemple

adecuadamente el poder relativo de los diferentes aspectos de esa política. La política fiscal se ha orientado al logro de un mejor equilibrio entre la demanda y la producción internas, en especial mediante su contribución al aumento del ahorro nacional, sin dejar de suministrar un estímulo de corto plazo que apoye la recuperación. La política monetaria pone la mira en la reducción de la inflación y de las expectativas inflacionarias. La política salarial se orienta a la contención de los salarios globales a la vez que se acentúa la flexibilidad del mercado de trabajo.

75. Se ha creado un marco para la transición a un sistema de fijación de los salarios basado en la empresa, que permitirá desempeñar una mayor función en su determinación a las necesidades y exigencias de un entorno comercial competitivo. El mayor margen de flexibilidad de los salarios reales mejorará la distribución de los recursos de mano de obra entre las distintas actividades y dentro de cada una de ellas, mejorando la productividad y la competitividad de las empresas.

76. La reforma microeconómica, tendiente a aumentar la productividad y competitividad de las empresas australianas, ha constituido un aspecto fundamental de la política económica desde mediados del decenio de 1980. Se han realizado importantes reformas del sector financiero; en servicios públicos como los de transporte, comunicaciones y electricidad; una revisión general del sistema impositivo para obtener mayor competitividad internacional y reducir sus efectos de distorsión interna; y se han hecho reducciones importantes de la protección a las industrias a través de contingentes y aranceles. También se realizan esfuerzos concertados para lograr en toda Australia una mayor uniformidad de las normas y reglamentaciones.

II. ESTRUCTURA POLITICA GENERAL

A. Resumen

77. Australia tiene un régimen constitucional federal, en el que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están compartidos o distribuidos entre las diversas instituciones federales y los seis Estados (Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia Occidental, Australia del Sur y Tasmania) y dos Territorios interiores autónomos. Cada una de estas entidades políticas tiene un parlamento elegido por la población, un poder ejecutivo responsable ante ese parlamento y formado por el partido mayoritario o los partidos mayoritarios en el parlamento, y un poder judicial independiente.

78. Además de los Estados, existen diez Territorios de Australia. El Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte, que son Territorios interiores, son autónomos y pueden considerarse, a los efectos de este informe, en situación fundamentalmente análoga a la de los Estados de Australia. Un tercer Territorio -el de la Isla Norfolk- tiene poderes legislativo y ejecutivo limitados que le permiten resolver sus propios asuntos en la mayor medida que resulta prácticamente posible.

79. La Constitución de Australia se ocupa principalmente del establecimiento de los órganos del Gobierno Federal y la distribución de las potestades constitucionales entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados.

80. La Constitución también determina la naturaleza y la distribución de las facultades entre los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y dispone que deben ser independientes y separados entre sí.

81. Conforme a la Constitución de Australia, el poder legislativo del Commonwealth de Australia corresponde al Parlamento del Commonwealth, que está formado por la Reina, el Senado y la Cámara de Representantes. La Reina está representada en todo el Commonwealth de Australia por el Gobernador General.

82. Después de cada elección general celebrada a nivel federal, el Gobernador General encomienda a un miembro del Parlamento el cargo de Primer Ministro. La persona elegida es el jefe del partido, o de una coalición de partidos, que haya obtenido la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes, o una persona que esté en condiciones de obtener el apoyo general o "voto de confianza" de la mayoría de esa Cámara. Los demás ministros del Gobierno son designados por el Gobernador General, por recomendación del Primer Ministro, entre los miembros del Parlamento.

83. En Australia tienen fuerza de ley:

a) Las leyes aprobadas por el Parlamento Federal, dentro del ámbito de sus atribuciones conforme a la Constitución de Australia, junto con la legislación delegada que se dicte conforme a tales leyes;

b) Las ordenanzas dictadas respecto del Territorio de la Capital de Australia, el Territorio del Norte, la Isla Norfolk y los demás Territorios, junto con la legislación delegada que se dicte conforme a tales ordenanzas;

c) Las leyes aprobadas por los parlamentos de los Estados y las Asambleas Legislativas del Territorio del Norte, el Territorio de la Capital de Australia y la Isla Norfolk, junto con la legislación delegada que se dicte conforme a tales leyes;

d) Aquella parte de las leyes o el common law de Inglaterra que haya sido recibida y aún rija en Australia y no sea derogada; y

e) El common law de Australia, desarrollado a partir del common law inglés, y que es interpretado y enunciado por los tribunales.

84. En Australia, tanto el sistema federal como los sistemas jurídicos de los Estados comprenden los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Así, existen sistemas de tribunales separados en el ámbito federal y el de los Estados, y la Constitución reconoce tanto el poder judicial de los Estados como el poder judicial federal. El Tribunal Superior de Australia, sin embargo, es el tribunal de última instancia respecto de todos los asuntos, independientemente de que hayan sido resueltos en jurisdicción federal o de los Estados.

B. El sistema federal australiano

1. Historia de la Federación Australiana

85. La población aborigen y los isleños del Estrecho de Torres se asentaron en Australia hace más de 40.000 años. Hubo hasta 200 grupos lingüísticos diferentes que vivieron en el continente australiano y la mayor parte de las

principales islas situadas frente a sus costas, incluyendo lo que ahora constituye el Estado de Tasmania.

86. En los siglos XVI y XVII españoles, portugueses y holandeses exploraron los mares circundantes y las costas de Australia. Los ingleses hicieron su primera aparición en la costa australiana en 1688. El 7 de febrero de 1788 se tomó "posesión" formal en nombre de la Corona Británica de toda la parte oriental del continente australiano y Tasmania. A mediados de 1829 la totalidad del territorio que hoy se conoce como Australia había pasado a constituir una dependencia del Reino Unido.

87. Entre 1788 y 1859 se fundaron en distintos lugares de Australia seis colonias independientes: Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania, Australia del Sur, Australia Occidental y Queensland. Esas colonias eran entidades casi soberanas, jurídicamente iguales e independientes entre sí, con sus propios parlamentos representativos.

88. Debido al tamaño del continente australiano y las circunstancias que rodearon la formación de los diversos asentamientos, la tendencia inicial apuntó a la evolución separada de las distintas colonias. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que se reconociera claramente la importancia de la vinculación entre ellas. La necesidad de organizar la defensa de Australia, de eliminar los obstáculos aduaneros internos y de contar con una política común de inmigración fueron algunas de las cuestiones que dieron impulso al federalismo.

89. La Federación Australiana quedó establecida en virtud de la Ley sobre la Constitución del Commonwealth de Australia de 1900, una Ley del Parlamento del Reino Unido que entró en vigor el 1° de enero de 1901. Conforme a sus términos, las seis colonias antes independientes quedaban unificadas en "un Commonwealth Federal indisoluble bajo la Corona del Reino Unido". Las colonias existentes se mantuvieron, sin embargo, con el nombre de Estados, y se estableció que los derechos de cada uno de ellos quedarían firmemente asentados, manteniéndose la igualdad de los Estados originales.

90. La creación del Commonwealth de Australia mediante la unión de las seis colonias australianas no significó, por sí sola, que Australia se constituyese como nación independiente. Australia seguía siendo parte del Imperio Británico. Sin embargo, la Constitución sentaba las bases para la independencia y la evolución hacia la soberanía conforme al derecho internacional, y la independencia del Parlamento Federal fue progresando rápidamente como consecuencia de la primera guerra mundial, en la que Australia y otros países del Commonwealth británico desempeñaron un papel destacado.

91. El primer paso importante hacia la autonomía en los asuntos exteriores tuvo lugar en la Conferencia de Paz de 1919. Australia tuvo una representación propia equivalente a la de otras Potencias, salvo las principales; firmó el Tratado de Paz, fue miembro de la Sociedad de Naciones y recibió territorios por mandato conferido por ella.

92. En 1926, una Conferencia Imperial dio lugar a una declaración en el sentido de que el Reino Unido y sus Dominios, incluida Australia, eran comunidades autónomas dentro del Imperio Británico, iguales aunque vinculadas por una común adhesión a la Corona. Se declaraba igualmente que el Gobernador General dejaba de ser un representante del Gobierno Británico y que el Gobierno de Australia habría de asesorar al Rey en los asuntos referentes al Dominio, en lugar de hacerlo el Gobierno Británico.

93. En el período comprendido entre las dos guerras mundiales, las facultades del Gobierno Británico respecto de Australia siguieron reduciéndose y, al término de la segunda guerra mundial, Australia había alcanzado la plena independencia como Estado soberano.

2. La Constitución

94. La Constitución de Australia se ocupa principalmente del establecimiento de los órganos del Gobierno Federal y la distribución de las potestades constitucionales entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados.

95. Las disposiciones iniciales de la Constitución establecen el cargo de Gobernador General, que representa a la Reina en toda Australia. Los capítulos I y II establecen las dos Cámaras del Parlamento y la rama ejecutiva del Gobierno, y definen en cierta medida sus facultades y responsabilidades. El capítulo III establece el poder judicial federal y el capítulo IV se refiere a asuntos financieros y comerciales. En el capítulo V figuran normas detalladas sobre competencias reservadas a las constituciones de los Estados, otras cuestiones referentes a los Estados y a las relaciones de éstos con el Commonwealth, y el capítulo VI prevé la creación de nuevos Estados. En el capítulo VIII figuran disposiciones sobre la modificación de la Constitución mediante referéndum.

96. La Constitución combina un régimen de gobierno democrático y responsable ante el Parlamento según el modelo de Westminster -el régimen que antes había existido en las colonias federadas- con una distribución de facultades entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados, asignándose al primero facultades específicamente enumeradas y conservando los Estados las facultades residuales no asignadas. Al crearse la Federación se procuraba crear un Gobierno Federal con poderes y atribuciones limitados, dejando todas las demás facultades a las colonias en su nueva forma de Estados independientes.

97. La mayor parte de las competencias enumeradas en la Constitución son concurrentes, de modo que tanto el Gobierno Federal como los gobiernos de los Estados pueden legislar en esas materias. Si sobre un mismo tema legislan el Gobierno Federal y el gobierno de un Estado, y las dos disposiciones legislativas son incompatibles, resulta nula la legislación del Estado en la medida de su incompatibilidad y predomina la legislación federal. Cuando esta última abarca la totalidad de cualquier materia, la legislación de los Estados sobre el mismo tema es nula.

98. Entre los temas más importantes que están comprendidos en la zona de competencia concurrente del Gobierno Federal y de los Estados figuran el comercio interestatal y de ultramar, los impuestos (excepto los derechos de aduana y los impuestos indirectos), las actividades bancarias, los seguros, las quiebras, el derecho de autor, las patentes, las marcas de fábrica o de comercio, el matrimonio y el divorcio y ciertos servicios sociales como las pensiones de vejez e invalidez, las prestaciones familiares y de maternidad, las pensiones para menores, las prestaciones por enfermedad y desocupación y los servicios médicos y odontológicos.

99. Ciertos temas están totalmente excluidos de la jurisdicción legislativa de los Estados y atribuidos exclusivamente al Gobierno Federal. Así ocurre con la imposición de derechos de aduana e impuestos indirectos y, salvo algunas excepciones, con el otorgamiento de subvenciones para la producción o exportación de mercancías; la acuñación y la determinación efectiva de los

medios de pago de curso legal; y las cuestiones relativas a los servicios públicos cuyo control ha sido transferido al Gobierno Federal por la Constitución, como el correo, la defensa nacional y los servicios que se ocupan de cuestiones relativas a la cuarentena.

100. Ningún Estado puede mantener fuerzas armadas propias sin la conformidad del Gobierno Federal. La Prerrogativa Real de declarar la guerra y hacer la paz sólo puede ejercerse por recomendación del Gobierno Federal, y sólo se reconoce a éste la facultad de negociar y concertar tratados.

101. Cuando un tema no está mencionado expresamente en la Constitución, ni está necesariamente implícito en sus disposiciones, el Gobierno Federal carece de facultades para legislar a su respecto. Entre esas materias figuran la enseñanza, el trabajo, la salud pública, la vivienda y el derecho penal general, salvo en los Territorios y en la medida en que puedan estar vinculados con otras facultades del Gobierno Federal. Este último puede, sin embargo, ejercer una considerable influencia sobre esos temas a través de las facultades expresas de que está investido, que incluyen su competencia financiera y sus facultades en materia de "asuntos exteriores".

102. Por ejemplo, conforme al artículo 96 de la Constitución el Gobierno Federal está facultado para prestar asistencia financiera a los Estados en las condiciones que estime convenientes. El Gobierno Federal tiene amplias facultades para imponer condiciones a tal asistencia determinando los fines a los que debe destinarse, aunque se trate de fines ajenos a las facultades constitucionales del Gobierno Federal. Como las finanzas de los Estados dependen en gran medida de estas formas de asistencia, el artículo 96 permite al Gobierno Federal influir en la política de los Estados en materias que corresponden a la competencia residual de los Estados.

103. El artículo 51(xxxi) asigna al Gobierno Federal la facultad de dictar leyes respecto de las relaciones exteriores. El Tribunal Superior ha declarado que esa disposición otorga la facultad de dictar leyes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de tratados en que Australia es parte y que ello puede incluir leyes referentes a materias no comprendidas en la competencia del Gobierno Federal. El Tribunal Superior también ha indicado que, conforme a la disposición citada, los asuntos de interés internacional podrían ser objeto de legislación aun cuando no existiera un tratado.

104. El artículo 51 de la Constitución también permite que el Parlamento Federal dicte leyes sobre asuntos que le hayan sido remitidos por un Estado. Tal ley sólo alcanzaría al Estado que hubiese remitido la cuestión al Parlamento Federal y a los Estados que posteriormente adoptaran la adoptaran.

105. La Constitución también determina la naturaleza y la distribución de las facultades entre los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y dispone que deben ser independientes y separados entre sí.

106. La Constitución dispone, en su artículo 128, la forma de modificación de sus propias disposiciones. El método adoptado ha dado lugar, sin embargo, a que las modificaciones de la Constitución resultasen muy difíciles de llevar a cabo. El proyecto de enmienda debe ser aprobado en primer lugar por la mayoría absoluta de ambas Cámaras del Parlamento. A continuación la propuesta debe ser sometida al pueblo de Australia en un referéndum, en voto por "Sí" o por "No". La enmienda sólo queda aprobada si recibe el voto afirmativo, en el referéndum,

de la mayoría del pueblo de Australia y la mayoría en cuatro de los seis Estados como mínimo.

107. Desde 1901 se han realizado 42 referéndums para sancionar enmiendas de la Constitución. Con excepción de ocho, todas las propuestas fueron rechazadas.

108. Una de las ocho propuestas de modificación de la Constitución que resultaron aprobadas se sometió a referéndum en 1967. Representó un jalón de gran importancia para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y determinó la modificación del artículo 51 de la Constitución y la derogación del artículo 127. La consecuencia de estas modificaciones fue que se facultó al Gobierno del Commonwealth para dictar leyes destinadas a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en concurrencia con los gobiernos de los Estados, y se permitió que se contara a la población aborigen en el cómputo de la población de Australia.

3. El Gobierno Federal

109. Conforme a la Constitución de Australia, el poder legislativo del Commonwealth de Australia corresponde al Parlamento del Commonwealth, que está formado por la Reina, el Senado y la Cámara de Representantes. La Reina está representada en todo el Commonwealth de Australia por el Gobernador General.

110. La Cámara Alta se conoce con el nombre de Senado y tiene 76 integrantes. El propósito del Senado era dar representación a los intereses de los pueblos de los Estados como integrantes de un sistema federal. La composición del Senado no está determinada por la población ni el tamaño de los territorios. Los Estados de menor población y territorio más reducido tienen igual número de miembros, 12 en la actualidad, que los más vastos y poblados. Todos los Estados tienen iguales derechos e igual representación. El artículo 7 de la Constitución dispone que los senadores de cada Estado serán elegidos directamente por el pueblo del Estado respectivo, que votará en una única circunscripción electoral. Desde diciembre de 1975 los dos Territorios autónomos, el Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte, están representados en el Senado por cuatro senadores.

111. La Cámara Baja es conocida como Cámara de Representantes. Tiene 147 miembros elegidos por la ciudadanía en circunscripciones en las que se vota por un único representante, de tal modo que el número de miembros de la Cámara que representan a cada Estado sea proporcional a su población.

112. En general, las leyes deben ser aprobadas por ambas Cámaras antes de ser presentadas al Gobernador General para su aprobación y entrada en vigor.

113. Australia tiene un régimen electoral basado en los principios democráticos del sufragio universal de los adultos y del derecho de los electores a que el voto de todos tenga igual peso. Los requisitos de la calidad de elector son idénticos en las elecciones para ambas Cámaras. Las personas que han cumplido 17 años de edad y son ciudadanos australianos, y han vivido en su lugar de domicilio durante un mes como mínimo, tienen derecho a inscribirse en las listas electorales. Si la persona tiene 18 años de edad y cumple los requisitos establecidos, la inscripción y el voto son obligatorios. Los súbditos británicos que no son ciudadanos australianos tienen derecho a inscribirse para votar si figuraban en las listas electorales federales el 25 de enero de 1984. Los requisitos para la inscripción a los efectos de las elecciones de los Estados son similares.

114. No tienen derecho a inscribirse en las listas electorales:

- a) Las personas que carecen de la capacidad mental necesaria para comprender la naturaleza y el significado de la inscripción y del voto;
- b) Las personas que han sido condenadas y cumplen penas por delitos que se castigan con pena de prisión de cinco años de duración o más;
- c) Las personas condenadas por traición que no han sido indultadas.

115. La Constitución reconoce asimismo un régimen de gobierno responsable en que los Ministros de la Corona integran el Parlamento y son directamente responsable ante él tanto individualmente, por sus respectivos departamentos, como colectivamente, y sólo pueden permanecer en sus cargos mientras cuentan con la "confianza" de la Cámara Baja. De este modo existe una responsabilidad bastante directa ante el pueblo que elige a los miembros del Parlamento, de quienes ocupan funciones ejecutivas sujetas a la confianza de la Cámara popular.

116. Después de cada elección general celebrada a nivel federal, el Gobernador General encomienda a un miembro del Parlamento el cargo de Primer Ministro. La persona elegida es el jefe del partido, o de una coalición de partidos, que haya obtenido la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes, o una persona que esté en condiciones de obtener el apoyo general o "voto de confianza" de la mayoría de esa Cámara. Los demás ministros del Gobierno son designados por el Gobernador General por recomendación del Primer Ministro, entre los miembros del Parlamento.

117. En el Commonwealth de Australia, el jefe de Estado es y ha sido siempre la persona que en ese momento es también Rey o Reina del Reino Unido, aunque desde 1953 se ha dado a esa persona el título independiente de Reina de Australia. La Constitución no hace referencia a la Reina como jefe de Estado. No obstante ello, es correcto considerarle jefe de Estado en vista de las funciones que la Constitución le asigna respecto del Gobierno. El artículo 61 de la Constitución asigna el poder ejecutivo a la Reina y declara que debe ser ejercido por el Gobernador General en carácter de representante de la Reina.

118. El Gobernador General ejerce el poder ejecutivo del Commonwealth de Australia y algunas otras facultades y funciones que la Constitución le asigna y que incluyen, entre otras, las siguientes:

- a) Convocar a las sesiones del Parlamento;
- b) La prórroga del Parlamento y la disolución de la Cámara de Representantes;
- c) Hacer dictar edictos de convocación a elecciones generales de miembros de la Cámara de Representantes;
- d) Dar consentimiento en nombre de la Reina a los proyectos de ley aprobados por ambas Cámaras del Parlamento;
- e) Designar y convocar a los Consejeros Ejecutivos, que permanecen en sus cargos mientras así lo estima del caso el Gobernador General;
- f) Designar a los Ministros de Estado del Commonwealth de Australia.

Además, el Gobernador General, como representante de la Reina, es Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa.

119. La Constitución dispone la designación del Gobernador General por la Reina, aunque en la práctica es designado por recomendación del Primer Ministro.

120. Numerosas leyes del Parlamento Federal disponen que el Gobernador General podrá dictar reglamentos para la aplicación de esas leyes. El Gobernador General también puede ser autorizado por la ley a emitir proclamas, por ejemplo, para declarar la entrada en vigor de una ley. Las leyes también han facultado al Gobernador General para legislar respecto de ciertos Territorios de Australia.

121. En teoría las facultades del Gobernador General son muy vastas. En la práctica, sin embargo, conforme a las disposiciones de la Constitución, así como por los principios de responsabilidad gubernamental del Commonwealth Británico de Naciones, las funciones ejecutivas del Gobernador General se ejercen casi exclusivamente por recomendación de los Ministros de Estado y es el Gobierno el que asume la responsabilidad política de tales actos. Al ejercer funciones y facultades legales y muchas facultades y funciones constitucionales, el Gobernador General actúa por recomendación del Consejo Ejecutivo Federal.

4. Los gobiernos de los Estados

122. Existen seis Estados que forman parte de Australia, y cada una de esas unidades políticas tiene su propia constitución, un parlamento de elección popular, un poder ejecutivo responsable ante ese parlamento y formado por el partido mayoritario o los partidos mayoritarios en el parlamento, y un poder judicial independiente. La legislatura de cada Estado dispone de una facultad general de dictar leyes en interés de la paz, el orden y la buena administración del Estado, aunque la formulación de esa facultad general varía levemente en algunos Estados. El alcance de las facultades legislativas de cada uno de los parlamentos está definido por la Constitución de Australia y la constitución del Estado.

123. La Ley sobre la Constitución del Commonwealth, aunque creó un vínculo federal entre las colonias del continente australiano, no sustituyó las constituciones anteriores de los Estados. El artículo 106 de la Constitución dispone que, sin perjuicio de la Constitución del Commonwealth, la constitución de cada Estado permanecerá en vigor en la forma en que regía al crearse el Commonwealth a menos que sea modificada de conformidad con la constitución del Estado.

124. La Reina está representada en cada uno de los Estados de Australia por un Gobernador que tiene respecto del Estado respectivo funciones análogas a las que están atribuidas al Gobernador General respecto del Gobierno Federal. En el desempeño de sus funciones generales, sobre todo las que le asignan las leyes, el Gobernador de un Estado actúa por recomendación de los Ministros de Estado del Estado respectivo.

5. El gobierno de los Territorios

125. Además de los Estados, existen diversos Territorios australianos. Australia tiene en total diez Territorios. Son los siguientes:

- a) Territorios continentales:
 - El Territorio de la Capital de Australia (que comprende a Canberra, capital de Australia y sede del Gobierno Federal);
 - El Territorio del Norte;
 - El Territorio de la Bahía Jervis.
- b) Territorios exteriores:
 - El Territorio Antártico Australiano;
 - La Isla Norfolk;
 - Las Islas Cocos (Keeling);
 - La Isla de la Navidad.
- Los territorios deshabitados, no continentales, son los siguientes:
 - El Territorio de las Islas Ashmore y Cartier;
 - El Territorio de las Islas del Mar de Coral;
 - El Territorio de las Islas Heard y McDonald.

126. De conformidad con la Ley sobre el Territorio del Norte (Autonomía) de 1978, y las leyes conexas, el Territorio del Norte tiene instituciones administrativas y representativas independientes y su propio sistema judicial. La Asamblea Legislativa del Territorio del Norte está facultada para dictar leyes para la paz, el orden y la buena administración del Territorio. El Gobierno Federal se ha reservado expresamente la facultad de legislar, respecto del Territorio del Norte, en temas relativos a las tierras de los aborígenes y la extracción de uranio y otras sustancias determinadas.

127. Del mismo modo, la Ley sobre el Territorio de la Capital de Australia (Autonomía) de 1988 estableció ese Territorio como entidad política separada, con su propia Asamblea Legislativa y poder ejecutivo. La Asamblea Legislativa está facultada para dictar leyes en beneficio de la paz, el orden y la buena administración del Territorio. No puede dictar leyes sobre la clasificación de los materiales a los efectos de la censura, los asuntos de los que trata el reglamento nacional sobre las sociedades, ni adquirir bienes sino en condiciones equitativas.

128. En lo sucesivo, las referencias a los Estados incluirán al Territorio de la Capital de Australia y al Territorio del Norte a menos que se indique otra cosa.

129. El Territorio exterior de la Isla Norfolk goza de autonomía limitada.

130. El Gobierno Federal conserva la facultad de legislar para todos los Territorios y tiene a su cargo la administración de los Territorios no autónomos.

C. El sistema de aplicación de la ley en Australia:
su naturaleza y sus órganos

1. El poder judicial

131. La independencia de la judicatura y su separación de los poderes legislativo y ejecutivo se considera de suma importancia en Australia, y se da por sobreentendido que los jueces, al interpretar y aplicar las leyes, actúan con independencia respecto del Gobierno. En el caso de los jueces federales, la Constitución garantiza su inamovilidad. En los Estados y Territorios, las leyes disponen la inamovilidad de los jueces.

132. Los jueces federales son designados por el Gobernador General en Consejo, es decir, por recomendación del Gobierno Federal; y solamente están sujetos a destitución mediante anuencia de ambas Cámaras del Parlamento por razones de incapacidad o mal desempeño comprobados. Su remuneración no puede ser reducida durante su mandato. Conforme a las leyes de la mayor parte de los Estados, los jueces de la Suprema Corte pueden ser destituidos por el Gobernador con anuencia de la Cámara o las Cámaras del Parlamento, sin expresión de fundamentos. En los Territorios, las normas sobre la destitución son iguales que en el plano federal.

2. El sistema judicial

133. El poder judicial del Commonwealth de Australia corresponde al Tribunal Superior de Australia, los tribunales federales creados por el Parlamento Federal y los tribunales de los Estados a los que el Parlamento ha conferido jurisdicción federal. La naturaleza y el alcance del poder judicial del Commonwealth se establecen el capítulo III de la Constitución de Australia.

134. El Consejo Privado, con sede en Londres, solía ser el tribunal de última instancia del sistema judicial australiano. En 1968, el régimen general de apelación quedó limitado a los asuntos de jurisdicción de los Estados. En 1975 se limitó aún más ese derecho al hacerse inapelables los fallos del Tribunal Superior, de modo que en los asuntos de jurisdicción de los Estados la parte perdedora ante la Suprema Corte de un Estado debía optar, para el ejercicio de su derecho de apelación, entre el Tribunal Superior y el Consejo Privado.

135. Existía consenso general en que esa situación no era satisfactoria, y se abrieron deliberaciones entre el Gobierno Federal y los Estados para resolver las dificultades constitucionales que se oponían a la total supresión de los recursos ante el Consejo Privado y otras disposiciones procesales que eran vestigios del pasado imperial. Esas discusiones condujeron a la aprobación de la Ley sobre Australia de 1986 (mediante la aprobación de leyes al respecto en cada uno de los Estados) y una ley complementaria del Parlamento del Reino Unido. La Ley sobre Australia eliminó todos los vínculos constitucionales que aún subsistían entre Australia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, incluido el recurso de apelación ante el Consejo Privado contra los fallos de tribunales de los Estados en el ejercicio de la jurisdicción propia de éstos. La Ley, sin embargo, no afecta a la posición de la Reina en su carácter de Reina de Australia.

136. La Constitución de Australia dispone que el poder judicial del Commonwealth de Australia debe corresponder a una "Suprema Corte Federal, que se denominará Tribunal Superior de Australia". La Constitución exige que el Tribunal Superior esté formado por un Presidente y no menos de otros dos jueces. En la actualidad

existen otros seis jueces. Al comienzo, los jueces eran designados con carácter vitalicio. Sin embargo, después de una enmienda de la Constitución efectuada en 1977, los jueces designados a partir de esa fecha cesan al cumplir 70 años de edad.

137. La Constitución de Australia confiere al Tribunal Superior dos clases de jurisdicción: originaria y de apelación. La jurisdicción originaria corresponde en las siguientes materias:

- a) Los asuntos derivados directamente de cualquier tratado;
- b) Los litigios entre Estados, o entre personas que demandan o son demandadas en nombre de diferentes Estados, o entre un Estado y una persona que demanda o es demandada en nombre de otro Estado;
- c) Los asuntos en que es parte el Commonwealth de Australia o una persona que demanda o es demandada en nombre del Commonwealth de Australia;
- d) Los asuntos entre Estados, o entre residentes de diferentes Estados, o entre un Estado y un residente de otro;
- e) Los asuntos en que se gestiona un mandamiento judicial -que supone la revisión judicial de actos administrativos- contra un funcionario del Gobierno Federal o de un tribunal federal. El Tribunal Superior comparte parcialmente su jurisdicción correspondiente a este artículo con el Tribunal Federal de Australia.

Además, el Tribunal Superior constituye el Tribunal Federal de Controversias sobre Resultados Electorales de conformidad con el artículo 354 de la Ley Electoral del Commonwealth de 1918.

138. El artículo 73 de la Constitución asigna al Tribunal Superior su jurisdicción como órgano de apelación respecto de las siguientes sentencias:

- a) Las dictadas por el Tribunal Superior en jurisdicción originaria;
- b) Las de los tribunales federales;
- c) Las de los tribunales que ejercen jurisdicción federal;
- d) Las de los Tribunales Supremos de los Estados.

139. Al examinar si ha de conocer en apelación respecto de una sentencia, el Tribunal Superior puede tomar en consideración cualquier cuestión que estime pertinente, pero está obligado a tener en cuenta los siguientes aspectos de la petición:

- a) Si se refiere a una cuestión de derecho de importancia pública, o a cuyo respecto existen diferencias de opinión entre distintos tribunales o entre los miembros de los tribunales;
- b) Si debe ser examinado por el Tribunal Superior en interés de la administración de justicia.

140. El Tribunal Superior es el tribunal de apelación de última instancia en Australia.

141. El Tribunal Federal de Australia fue creado por la Ley sobre el Tribunal Federal de Australia de 1976, y comenzó a ejercer su jurisdicción el 1° de febrero de 1977. Está formado por una División Laboral y una División General. Los asuntos fundados en la Ley sobre las Relaciones Laborales de 1988 son tratados por la División Laboral, y todos los demás lo son por la División General. El Tribunal sesiona, según corresponda, en cada Estado, en el Territorio de la Capital de Australia y en el Territorio del Norte.

142. El Tribunal tiene la jurisdicción originaria que le asignan las leyes dictadas por el Parlamento Federal y que incluye, por ejemplo, los asuntos en que se gestiona un mandamiento judicial contra un funcionario del Gobierno Federal, las quiebras, el derecho de las sociedades, el derecho tributario y el derecho comercial. Además, el Tribunal Federal falla en las controversias sobre resultados electorales de conformidad con la Ley sobre la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres de 1989.

143. El Tribunal Federal de Australia ejerce jurisdicción en apelación respecto de los fallos de los jueces que lo integran, los de las Supremas Cortes de los Territorios de Australia con excepción del Territorio del Norte, y ciertos fallos de las Supremas Cortes de los Estados cuando ejercen jurisdicción federal.

144. La Ley sobre el Derecho de Familia de 1975, que entró en vigor el 5 de enero de 1976, estableció un nuevo régimen legal de disolución y nulidad del matrimonio, guarda y atención de los menores, pensiones, y liquidación de derechos patrimoniales entre los cónyuges en Australia. La Ley creó el Tribunal de Familia de Australia, tribunal especializado que se ocupa únicamente de procedimientos referentes al matrimonio y temas conexos.

145. La principal modificación que determinó la Ley consiste en que el comportamiento y la culpa en el matrimonio han dejado de tomarse en consideración como fundamentos del divorcio. La Ley establece un único fundamento para el divorcio -el de la ruptura irreversible del matrimonio- que se comprueba cuando los cónyuges han vivido separados (incluyendo el caso de la separación bajo un mismo techo) durante 12 meses sin que existan perspectivas razonables de reconciliación.

146. La Ley sobre el Derecho de Familia trata también de la guarda, el cuidado, el derecho de visita y la manutención de los hijos nacidos fuera del matrimonio y establece un amplio régimen de solución de los litigios entre las personas divorciadas respecto de sus bienes y para la manutención de sus cónyuges cuando corresponde. Las normas sobre pensiones para los hijos establecen un amplio régimen de manutención de los menores. El Organismo de Apoyo a los Menores, creado en 1988 como parte de la Oficina Impositiva de Australia, administra el Plan de Apoyo a los Menores, que evalúa la manutención según la capacidad de contribución de ambos progenitores, y las pensiones dispuestas judicialmente se aplican mediante retenciones efectuadas directamente en los salarios.

147. En virtud de la Ley sobre el Derecho de Familia se da gran importancia a los servicios de asesoramiento que se ofrecen a través de los Tribunales de Familia a las partes en los procesos, así como a todas las personas que han encontrado problemas de matrimonio o dificultades para la solución de cuestiones de guarda y visita de menores. Sin embargo, no es necesario entablar procedimientos judiciales para poder hacer uso de tales servicios.

148. Los tribunales de los Estados y Territorios de Australia tienen jurisdicción originaria en todas las cuestiones que corresponden a las leyes de los Estados o Territorios, y en las derivadas de leyes federales cuando se les ha asignado jurisdicción por el Parlamento Federal. La mayor parte de los asuntos penales, ya se funden en leyes federales o de los Estados o Territorios, son juzgados por tribunales de los Estados o Territorios.

149. Todos los Estados y los Territorios deshabitados, con excepción del Territorio Antártico Australiano y del Territorio de la Bahía Jervis, tienen su propio sistema judicial independiente formado por una Suprema Corte, en la mayoría de los casos un tribunal intermedio -conocido generalmente como tribunal de distrito o de condado- y tribunales locales de jurisdicción sumaria. Los Tribunales Supremos de los Estados y Territorios son los de mayor jerarquía en ellos y conocen en los litigios civiles más importantes y los asuntos penales más graves. También ejercen jurisdicción en apelación respecto de los fallos de tribunales inferiores de los Estados; y el Tribunal Supremo, actuando en plenario, puede conocer en apelación respecto de los fallos dictados en su nombre por uno solo de sus jueces. Los tribunales intermedios, que son presididos por un solo juez, resuelven la gran mayoría de los asuntos derivados de delitos graves cuando los hechos respectivos deben determinarse por un jurado. También conocen en materia civil hasta ciertos límites de cuantía.

150. Los tribunales de jurisdicción sumaria son presididos por un magistrado y conocen en trámites sumarios, es decir, sin participación de jurado. Conocen en la mayor parte de los delitos comunes (de trámite sumario), como las infracciones de tránsito, las agresiones menores y los delitos cometidos en las calles. Los magistrados también llevan a cabo procedimientos preliminares respecto de los delitos más graves para determinar si existen, prima facie, fundamentos que deban someterse a juez y jurado, en un tribunal intermedio o la Suprema Corte. En la mayor parte de las jurisdicciones, estos tribunales tienen también competencia en materia civil para el cobro de créditos, demandas de menor cuantía de un ciudadano contra otro o contra una sociedad, así como algunos litigios sobre manutención, guarda y distribución de bienes, por la jurisdicción que les asigna la Ley Federal sobre el Derecho de Familia.

151. En todos los Estados y Territorios se han establecido tribunales de asuntos de menor cuantía a fin de que esos litigios puedan resolverse con rapidez y de modo poco oneroso e informal. Los procedimientos de esos tribunales se han simplificado para facilitar el trámite de los pequeños litigios. En algunas jurisdicciones se admite la defensa profesional, mientras que en otras requiere el acuerdo de las partes. También existen límites en materia de costas. La jurisdicción de los tribunales de asuntos de menor cuantía está limitada a máximos que varían entre 2.000 dólares en Tasmania y Australia Occidental y 5.000 dólares en el Territorio de la Capital de Australia.

Reforma legislativa

152. La reforma legislativa se efectúa principalmente a través del Parlamento Federal y los parlamentos de los Estados, que actúan en ciertos casos sobre la base de recomendaciones formuladas por los Fiscales Generales, las Comisiones de Reforma Legislativa de Australia o de los Estados y las Supremas Cortes de los Estados o los Tribunales Federales.

153. La Comisión de Reforma Legislativa de Australia comenzó sus trabajos en 1975 para informar sobre la revisión, simplificación y modernización de las leyes referentes a los asuntos que la Constitución de Australia asigna a la

jurisdicción del Parlamento Federal y examinar propuestas sobre la uniformidad de las leyes de los Estados y Territorios de Australia.

154. De conformidad con la ley que la rige, la Comisión sobre la Reforma Legislativa de Australia debe asegurar en sus trabajos que las leyes y los proyectos de reforma legislativa de Australia no lesionen los derechos y libertades personales, no condiciones indebidamente los derechos y libertades de los ciudadanos a decisiones administrativas en lugar de judiciales, y sean compatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asistencia jurídica

155. El objetivo del Gobierno Federal en materia de asistencia jurídica consiste en asegurar, en cooperación con los Estados y los Territorios, que se asegure el acceso razonable a la administración de justicia a las personas necesitadas y a quienes se encuentren en circunstancias especiales. La Oficina de Asistencia Jurídica y Servicios a las Familias, que forma parte del Departamento del Fiscal General Federal, tiene a su cargo la coordinación de la aplicación y el desarrollo de las medidas y programas nacionales de asistencia jurídica. Esto se lleva a cabo en cooperación y consulta con las diversas comisiones de asistencia jurídica.

156. El plan de asistencia jurídica se basa en la colaboración y el aporte de diversos participantes fundamentales. Entre ellos figuran el Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados y Territorios, las comisiones de asistencia jurídica, los centros jurídicos comunitarios y los profesionales del derecho particulares.

157. Conforme a las disposiciones actuales, se suministra asistencia jurídica a través de la comisión independiente de asistencia jurídica de cada Estado y Territorio y de diversos centros jurídicos comunitarios. Conforme a la política oficial de autogestión de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, también se presta asistencia jurídica por los Servicios Jurídicos para Aborígenes que funcionan en toda Australia (véase más adelante).

158. El Gobierno Federal suministra más de la mitad de los fondos destinados a la asistencia jurídica, y el resto se obtiene de subvenciones de los Estados y Territorios, intereses devengados por las cuentas obligatorias y cuentas de fideicomiso de los abogados, intereses devengados por inversiones, contribuciones de los clientes y costas obtenidas. Los recursos se destinan al suministro de asesoramiento jurídico, servicios de defensores de oficio y asistencia jurídica en procedimientos penales, civiles y de familia. Los servicios de asesoramiento jurídico se prestan directamente por abogados contratados o a través de profesionales particulares. La asistencia se presta a las personas que más lo necesitan sobre la base del examen de las circunstancias del caso y los recursos del interesado. En algunos Estados, las circunstancias del caso no se toman en cuenta respecto de los asuntos penales que pueden dar lugar a inculpación.

159. El Gobierno Federal también suministra asistencia jurídica financiera a través de otros diversos planes establecidos por la ley o de otro origen, como por ejemplo a los beneficiarios del Plan de Pensiones para Menores. Existen 21 programas creados por leyes federales y otros seis de distinto origen por los que el Fiscal General está facultado para autorizar asistencia financiera. Entre los programas de origen legal figura la disposición sobre asistencia de la Ley sobre la Discriminación Racial de 1975, la Ley sobre la Discriminación por

Razones de Sexo de 1984 y la Ley sobre Crímenes de Guerra de 1945. Entre los programas que no son de origen legal por los que puede prestarse asistencia financiera figuran los relativos a asuntos de interés público y los casos de prueba, las situaciones excepcionales sobrevenidas en ultramar, los casos de guarda de menores en el extranjero (sustracción de menores) y los referentes a Comisiones Reales e indagaciones.

160. El Tribunal Superior de Australia examinó recientemente la cuestión del derecho de un acusado indigente a tener defensa en juicio en un caso en que se le había denegado la asistencia jurídica [Dietrich contra R (1992) 109 ALR 385]. El Tribunal resolvió por mayoría que cuando un juez de primera instancia recibe una solicitud de suspensión o aplazamiento de un acusado de delito grave que no puede obtener la asistencia de defensor en juicio por razones que no le son imputables, el juicio debe ser suspendido, prorrogado o aplazado hasta que se cuente con un defensor a menos que medien circunstancias excepcionales. Si el juicio prosigue en tales condiciones sin que el acusado tenga defensor, el juzgamiento no será justo y cualquier condena será nula. Todos los miembros del Tribunal Superior convinieron, sin embargo, en que no existía derecho a los servicios de un defensor con cargo a fondos públicos en los juicios por delitos graves.

Servicios jurídicos para los aborígenes

161. Existen en toda Australia 22 Servicios Jurídicos para Aborígenes, todos los cuales están financiados por el Gobierno Federal a través de la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. Todos los servicios están a cargo de organizaciones independientes dirigidas por una junta que determina si el servicio ha de aceptar o no cada caso. Los Servicios Jurídicos para Aborígenes fueron creados para prestar servicios jurídicos a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y sus familias como reconocimiento de su situación de desventaja, cultural y económica, respecto de la comunidad en general. El primer servicio de esta clase se creó a comienzos del decenio de 1970.

3. La policía

162. Los principales deberes de la policía son la prevención y la investigación de los delitos, la protección de la vida y los bienes y la aplicación de la ley para el mantenimiento de la paz y el orden. Además, puede corresponderle desempeñar otras diversas funciones que incluyen el ordenamiento del tráfico en las calles, la investigación de accidentes y diversos servicios en casos de emergencia.

163. Con excepción de la Policía Federal Australiana, las fuerzas de policía de Australia están bajo el control de los gobiernos de los respectivos Estados y del Territorio del Norte. Sin perjuicio de las obligaciones internacionales de Australia, esos gobiernos tienen la responsabilidad general de dictar y aplicar los reglamentos de policía, sus procedimientos y prácticas, incluido lo relativo al arresto y la detención de personas sospechosas, las entrevistas de los detenidos y las disposiciones especiales para infractores menores de edad y otros sectores minoritarios. En Australia, la lucha contra la delincuencia se apoya fuertemente en la policía de los Estados y Territorios.

164. La Policía Federal Australiana tiene a su cargo la aplicación de las leyes federales, colabora en la vigilancia de los Territorios federales y cumple tareas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Una parte importante

de las actividades de la Policía Federal Australiana corresponde a las esferas del tráfico de drogas y a los llamados "delitos sin víctimas", como la defraudación del Commonwealth de Australia.

165. La policía procura mejorar la calidad de la vida en la comunidad prestando diversos servicios relacionados con la lucha contra la delincuencia y el control de los desórdenes. El concepto de policía de la comunidad está en armonía con una interpretación amplia de la función policial. Al mismo tiempo, la policía conserva su capacidad de responder con medios enérgicos o unidades especializadas, cuando se ve obligada a hacer frente a delitos importantes o amenazas a la paz.

III. ESTRUCTURA JURIDICA GENERAL QUE ENMARCA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. Resumen

166. La Constitución de Australia no atribuye expresamente al Parlamento Federal ninguna facultad general ni específica de legislar en materia de derechos humanos. Sin embargo, el Parlamento Federal está facultado por la Constitución para legislar respecto de los "asuntos exteriores". El Tribunal Superior de Australia ha confirmado que esto comprende la facultad de dictar leyes para la aplicación de las obligaciones derivadas de los tratados concertados por Australia.

167. Sin embargo, el ejercicio de esta facultad federal no representaría por sí solo un medio eficiente para que Australia pusiera en práctica sus obligaciones internacionales. Gran parte de la infraestructura pública de Australia se encuentra en el plano de los Estados, que también tienen a su cargo elementos importantes del régimen judicial australiano. En consecuencia, los Estados ejercen responsabilidades en múltiples materias de importancia para la aplicación de los derechos humanos.

168. La Constitución no contiene disposiciones organizadas en forma de una carta de derechos, y la protección de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos australianos no se apoya en ningún sistema formal de garantías constitucionales. Sin embargo, la Constitución contiene un número limitado de garantías expresas o implícitas de derechos e inmunidades. Habrán de analizarse en detalle más adelante.

169. En Australia los tratados, entre ellos los instrumentos de derechos humanos, no son de aplicación directa y requieren un instrumento legislativo para que puedan regir en el derecho interno. Ciertos instrumentos de derechos humanos figuran anexos a la Ley sobre Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de 1986; tal circunstancia, sin embargo, no tiene la consecuencia de incorporarlos en el derecho interno de Australia. Más adelante se analizarán las facultades que esos instrumentos dan a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.

170. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades es una autoridad permanente e independiente, de creación legal, que tiene responsabilidades respecto de las siguientes Leyes dictadas por el Parlamento:

Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de 1986;

Ley sobre la Discriminación Racial de 1975;

Ley sobre la Discriminación por razones de Sexo de 1984;

Ley sobre la Discriminación por Discapacidad de 1992.

La Comisión también presta asistencia al Comisionado sobre Protección de la Vida Privada en la administración de la Ley sobre la Protección de la Vida Privada de 1988.

171. Las funciones de la Comisión en materia de derechos humanos comprenden la facultad de conocer en denuncias, así como amplias funciones de promoción y política general.

172. También rigen leyes contra la discriminación en Nueva Gales del Sur, Queensland, Victoria, Australia del Sur, Australia Occidental, el Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte. No existen tales leyes en la jurisdicción de Tasmania. Las leyes federales sobre derechos humanos rigen en toda Australia y existen algunas esferas en que las disposiciones de los Estados y Territorios se superponen con las federales.

B. Introducción

173. En Australia se utilizan diversos métodos y estrategias para la aplicación y protección de los derechos humanos. Esas formas de protección pueden clasificarse en dos grandes categorías:

- a) Los procedimientos institucionalizados propios de una sociedad liberal y democrática, como los parlamentos y el sistema judicial independiente;
- b) Los mecanismos especiales creados por la ley para la protección de los derechos humanos, como la Comisión Federal de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres.

174. El elevado nivel de aceptación, protección y observancia de los derechos humanos en Australia se funda en un régimen de gobierno representativo y responsable, algunas limitadas garantías constitucionales, disposiciones legales que comprenden normas especializadas sobre los derechos humanos, el common law y la independencia de la judicatura.

C. Aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos

175. En Australia los tratados, y entre ellos los instrumentos sobre derechos humanos, no son de aplicación automática y requieren disposiciones legislativas para que puedan constituir derecho vigente en el país. De este modo, un particular no puede recurrir a un tribunal nacional por una violación de las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos a menos que ese derecho esté incorporado en la legislación interna. Antes de que Australia firme o ratifique un tratado o se obligue por él en cualquier forma, el Gobierno verifica la vigencia de las normas legislativas necesarias para su aplicación.

176. Ciertos instrumentos de derechos humanos figuran anexos a la Ley sobre Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de 1986; tal circunstancia, sin embargo, no tiene la consecuencia de incorporarlos en el derecho interno de Australia. Más adelante se analizarán las facultades que esos instrumentos dan a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.

177. Los tratados de derechos humanos también tienen importancia desde el punto de vista del ejercicio de la discrecionalidad administrativa y como normas de referencia en el desarrollo del common law. En opinión de algunos jueces, "las modernas formulaciones de los derechos humanos que se encuentran en los instrumentos internacionales pueden constituir ... una fuente válida de orientación para la declaración del common law" [Kirby P, Tribunal de Apelaciones de Nueva Gales del Sur, Jago contra Jueces del Tribunal de Distrito (1988) 12 NSWLR 558, 569]. Algunas sentencias recientes del Tribunal Superior han indicado igualmente una disposición judicial favorable a tomar en consideración las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos para el desarrollo del common law.

178. En el sistema constitucional federal de Australia, cuyos poderes legislativo, ejecutivo y judicial están compartidos o distribuidos entre sus autoridades federales y de los Estados y Territorios, la aplicación de los tratados se lleva a cabo por el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados y Territorios teniendo en cuenta sus respectivas facultades constitucionales y las disposiciones relativas a su ejercicio. Se han formulado declaraciones en ese sentido respecto de varios tratados sobre derechos humanos en los que Australia es parte.

179. La Constitución no atribuye expresamente al Parlamento Federal ninguna facultad general ni específica de legislar en materia de derechos humanos. En realidad, en la Constitución no existe referencia alguna al derecho internacional ni al lugar que ocupa en el sistema jurídico de Australia. Pero el Parlamento Federal tiene conforme a la Constitución la facultad de legislar respecto de "los asuntos exteriores". El Tribunal Superior de Australia ha confirmado que esto comprende la facultad de legislar para la aplicación de las obligaciones contraídas por Australia en virtud de tratados.

180. Sin embargo, el ejercicio de esta facultad federal no representaría por sí solo un medio eficiente para que Australia pusiera en práctica sus obligaciones internacionales. Gran parte de la infraestructura pública de Australia se encuentra en el plano de los Estados, que también tienen a su cargo elementos importantes del régimen judicial australiano. En consecuencia, los Estados ejercen responsabilidades en múltiples materias de importancia para la aplicación de los derechos humanos.

181. Siempre que los Estados puedan asegurar que las obligaciones en materia de derechos humanos se cumplen efectivamente en la administración de tales asuntos, el ejercicio de facultades federales para el logro del mismo fin daría lugar a frecuentes duplicaciones superfluas de infraestructura y de gastos. El Gobierno Federal, por lo general, deja a cargo de los Estados la responsabilidad de aplicar los tratados internacionales cuando se trata de obligaciones contraídas en esferas de interés particular de ellos y tal solución es compatible con el interés nacional y el cumplimiento eficaz y puntual de las obligaciones contractuales de Australia.

182. El Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados han adoptado un criterio de cooperación para la aplicación de las obligaciones internacionales de

Australia, que encuentra expresión en los Principios y Procedimientos de Consulta entre el Commonwealth y los Estados acerca de los Tratados. Conforme a estos procedimientos, antes de que Australia se incorpore en cualquier acuerdo internacional de importancia para los Estados se celebran consultas para procurar un acuerdo sobre la forma en que han de aplicarse las obligaciones contraídas. Los Estados también participan estrechamente en la preparación de los informes a organismos internacionales sobre el cumplimiento de los tratados, y existen vías de comunicación firmemente establecidas entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados para asegurar que Australia pueda cumplir puntualmente sus responsabilidades internacionales. Durante muchos años ha funcionado un Comité Permanente del Fiscal General Federal y los Fiscales Generales de los Estados y Territorios, y las cuestiones de derechos humanos constituyen un tema regular de su programa.

183. Gracias al procedimiento de consultas, se ha planteado muy pocas veces el caso de que un Estado o Territorio actuara en forma contraria al cumplimiento por Australia de sus obligaciones conforme a los instrumentos sobre derechos humanos. Cuando se manifiestan tales dificultades, o en caso de gran retraso de parte del gobierno de un Estado o Territorio, el Gobierno Federal sigue teniendo la posibilidad de adoptar cualquier medida necesaria para asegurar que Australia cumpla efectivamente esas obligaciones.

D. Procesos institucionalizados existentes

1. Los parlamentos de Australia

184. El régimen de gobierno liberal y democrático de cada una de las jurisdicciones de Australia permite que los particulares interesados den conocimiento de los temas en que los derechos humanos y las libertades fundamentales necesiten protección o una protección más completa. En virtud del sistema de "gobierno responsable", los ministros responden ante el Parlamento individual y colectivamente y sólo pueden permanecer en sus cargos mientras cuentan con la "confianza" de la Cámara Baja. El Gobierno del país es supervisado estrechamente por el Parlamento, ya que los ministros deben someter su política a la aprobación de las Cámaras y dependen del Parlamento para la sanción de cualquier ley necesaria para su aplicación. Los ministros también deben responder preguntas en la Cámara acerca de los asuntos de competencia de sus departamentos.

185. Toda persona tiene el derecho de presentar exposiciones para formular denuncia ante un miembro del Parlamento. Es frecuente que las personas se dirijan al representante de su circunscripción, que responde directamente ante sus electores y quedará sometido al juicio de ellos en la elección siguiente. Los miembros del Parlamento suelen atender esas solicitudes de sus electores mediante correspondencia con el ministro u organismo competente o remitiendo la cuestión a un órgano de revisión, como el Ombudsman. A veces, esas exposiciones dan objeto a la formulación de una pregunta en el Parlamento.

186. Además, varias comisiones permanentes del Parlamento supervisan los proyectos de ley e informan sobre sus diferentes aspectos. La Comisión Permanente del Senado para el Examen de los Proyectos de Ley fue creada en 1981 con el fin de examinar las medidas legislativas propuestas por el Gobierno y señalar al Senado, en el que no suele existir mayoría gubernamental, "la posibilidad de una lesión de los derechos y libertades individuales o de las facultades legislativas del Parlamento".

187. La Comisión Permanente del Senado sobre Reglamentos y Ordenanzas debe examinar, conforme a su mandato, las normas de legislación delegada que no son aprobadas por las Cámaras del Parlamento. Las directrices de la Comisión exigen específicamente que examine la legislación delegada cuando "suprima, reduzca, circunscriba o condicione los derechos y libertades fundamentales de que se disfruta tradicionalmente en una sociedad libre y democrática". La Comisión procura asegurar que la legislación delegada cumpla los siguientes requisitos:

- a) Que esté en conformidad con la ley;
- b) Que no lesione indebidamente derechos y libertades individuales;
- c) Que no condicione indebidamente los derechos y libertades de los ciudadanos respecto de decisiones administrativas no sujetas a la revisión de su mérito por tribunales judiciales u otros órganos independientes;
- d) Que no contenga cuestiones cuya aprobación corresponda más adecuadamente al Parlamento.

La Comisión puede dirigirse al ministro competente procurando, por ejemplo, la modificación de un proyecto de ley y, si por ese procedimiento no se resuelven las preocupaciones de la Comisión, puede proponer que la legislación delegada se revoque por el Senado.

2. Garantías constitucionales

188. La Constitución de Australia estaba destinada fundamentalmente a lograr la unión económica, facilitar el desarrollo del comercio en los Estados y entre ellos y establecer una nueva entidad política, el Commonwealth de Australia. La Constitución no contiene disposiciones organizadas en forma de una carta de derechos, y la protección de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos australianos no se apoya en ningún sistema formal de garantías constitucionales.

189. Sin embargo, la Constitución contiene un número importante de garantías expresas o implícitas de derechos e inmunidades. Algunas de las garantías expresas son las siguientes:

- a) Todo bien adquirido por el Gobierno Federal debe serlo en condiciones justas (artículo 51(xxxi));
- b) El juzgamiento bajo acusación de cualquier delito establecido por una ley del Commonwealth debe realizarse mediante jurado (artículo 80);
- c) Los intercambios entre los Estados serán libres (artículo 92);
- d) El Gobierno Federal no dictará leyes que establezcan ninguna religión ni pondrá obstáculos a la libertad religiosa (artículo 116); y
- e) Los ciudadanos no serán sometidos a discriminación en ningún Estado debido a su residencia en otro Estado (artículo 117).

190. Las garantías que se mencionan en los artículos 51(xxxi), 80 y 116 de la Constitución sólo se refieren a la injerencia del Gobierno Federal en los derechos de los ciudadanos. Existen importantes esferas de la legislación que se refieren a los derechos humanos, o pueden afectar a su disfrute, y que corresponden a la jurisdicción de los Estados y Territorios. Las constituciones

de algunos Estados disponen garantías expresas de ciertos derechos civiles y políticos. Por ejemplo, en el artículo 46 de la Ley sobre la Constitución de 1934 (Tasmania) se establece la garantía de la libertad de religión.

191. También se ha declarado que ciertas disposiciones de la Constitución contienen garantías implícitas de derechos individuales. El Tribunal Superior de Australia ha declarado que el artículo 71 de la Constitución, que separa el poder judicial de los poderes legislativo y ejecutivo y asigna el primero a los tribunales, garantiza que las cuestiones que normalmente son materias sometidas al poder judicial (derechos y responsabilidades de las personas, particularmente en la esfera penal) deben ser objeto de un juicio justo.

192. El Tribunal Superior también ha indicado que existen algunos derechos inherentes a la estructura misma de la Constitución. El Tribunal ha declarado recientemente que la Constitución está fundada en un sistema de "democracia representativa" y que, como la libertad de comunicación y de discusión sobre los temas políticos y las instituciones de gobierno es fundamental para ese sistema, las leyes que vulneren la libertad de comunicación sobre "asuntos políticos" son nulas, a menos que sean indispensables para proteger algún otro interés público. Estas sentencias han destacado la posibilidad de que el Tribunal pueda declarar la existencia de otros derechos inherentes a la Constitución.

Una Carta de Derechos para Australia

193. Desde que se consagró la Federación se mantiene la discusión acerca de la necesidad de una Carta de Derechos para Australia, y el Gobierno Federal efectivamente ha intentado varias veces incorporar una Carta de Derechos en la legislación australiana. En 1973 se presentó al Parlamento el proyecto de Ley de Derechos Humanos, que establecía en forma legislativa la mayor parte de los derechos que figuran en los artículos 2 a 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese momento, Australia no había ratificado todavía el Pacto. El proyecto de ley encontró fuerte oposición de los Estados y por último caducó al disolverse ambas Cámaras del Parlamento en abril de 1974, antes de una elección federal.

194. En octubre de 1985, el Gobierno Federal presentó el Proyecto de Ley sobre la Carta de Derechos de Australia de 1985. El proyecto procuraba establecer una carta de derechos y libertades basada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y estaba destinado a servir de guía para la interpretación judicial de las leyes federales y de los Territorios (salvo el Territorio del Norte). Las leyes deberían interpretarse en la medida de lo posible en forma que no fuese incompatible con la Carta de Derechos. Además, y con algunas excepciones limitadas, la Carta de Derechos debía predominar sobre las leyes federales y de los Territorios (salvo el Territorio del Norte) que fuesen incompatibles con ella. Sin embargo, el proyecto de ley fue retirado en noviembre de 1986.

195. En 1988 se intentó modificar la Constitución de Australia para reforzar tres de los derechos y libertades que ya figuran en ella: el juicio por jurados, la justa indemnización de las expropiaciones y la libertad de religión. En el Proyecto de Ley sobre Modificación de la Constitución (Derechos y Libertades) de 1988 se proponía extender esas libertades y derechos respecto de las medidas adoptadas por los Estados y Territorios. El proyecto también exigía el juicio por jurados cuando el acusado fuera pasible de una pena de prisión de más de dos años o cualquier forma de castigo corporal, incluida la pena capital. En la actualidad, la Constitución impone el juicio por jurados cuando se realiza

por acusación de cualquier delito fundado en una ley federal. El proyecto de ley fue aprobado por ambas Cámaras del Parlamento, pero resultó rechazado en el referéndum ulterior.

3. El common law

196. Australia tiene un sistema jurídico de common law, lo que significa que el reconocimiento y la protección de muchos derechos y libertades fundamentales se basa en la incorporación de esos derechos en el common law, efectuada por los jueces a lo largo de los siglos. Así, por ejemplo, el derecho a la libertad personal y a la justicia natural y muchas de las garantías procesales que figuran en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos están establecidos en el common law.

197. Esos derechos fundamentales son de carácter residual, es decir, existen salvo en la medida en que estén limitados por las leyes. Los tribunales no interpretan una ley en el sentido de que suprime un derecho del common law a menos que el propósito del legislador se encuentre manifestado por términos expresos o esté necesariamente implícito. Los tribunales adoptan por lo general una interpretación estricta a este respecto, y cuando una ley es susceptible de una interpretación que no choque con un derecho del common law le dan esa interpretación. Los tribunales, al interpretar una ley, presumen también que el Parlamento no se proponía violar el derecho internacional, por ejemplo los tratados en que Australia es parte.

4. El poder judicial

198. El poder judicial desempeña una importante función en la protección de ciertos derechos y libertades reconocidos que se consideran fundamentales y en el desarrollo de reglas de interpretación de la ley que reducen el grado de injerencia legislativa en esos derechos y libertades.

199. El Tribunal Superior, en sentencias recientes, ha indicado que existen límites de la competencia legislativa del Parlamento para dictar leyes contrarias a los derechos fundamentales que se encuentran implícitos en la estructura de la Constitución de Australia y en la naturaleza libre y democrática de la sociedad australiana.

5. Los medios de difusión

200. En Australia, los medios de difusión gozan de un alto grado de libertad que permite a la prensa, la radio y la televisión desempeñar un importante papel en la denuncia de las violaciones de derechos humanos y ejercer presión en favor de medidas reparatorias. Los medios de difusión pueden informar libremente sobre las decisiones del Parlamento y las sentencias judiciales en asuntos referentes a los derechos humanos, y es frecuente que la atención prestada por los medios de difusión a determinado asunto dé origen a preguntas formuladas en el Parlamento.

6. Recursos contra los actos administrativos

201. A lo largo de los siglos se fueron desarrollando procedimientos en el common law para que las personas pudiesen impugnar ante los tribunales los fundamentos de los actos administrativos. Esos procedimientos, sin embargo, han resultado demasiado técnicos y engorrosos, a la vez que de costo excesivo.

Generalmente, los fundamentos del common law para la revisión se referían a la legalidad de los actos y no la admitían por razones de mérito.

202. Tras la presentación de un informe de la Comisión Federal sobre la Revisión de los Actos Administrativos en 1971, en el que se destacaban estas dificultades, el Gobierno de Australia estableció un régimen legislativo que permite impugnar diversos tipos de resoluciones adoptadas en virtud de leyes federales y conocer los fundamentos en que se basa cada acto. El régimen comprendía las siguientes leyes: la Ley sobre el Tribunal de Revisión de los Actos Administrativos de 1975; la Ley sobre Resoluciones Administrativas (Revisión Judicial) de 1977; la Ley sobre el Ombudsman de 1976; y la Ley sobre Libertad de Información de 1982.

203. Entre los Estados, sólo en Victoria se ha aplicado una reforma comparable con el nuevo régimen administrativo federal, mediante la introducción de un procedimiento simplificado que permite obtener la revisión judicial, la creación de un Tribunal de Revisión de Actos Administrativos y la sanción de una ley sobre libertad de información. El Estado de Queensland tiene una ley que permite la revisión judicial de las decisiones administrativas, pero no cuenta con ningún órgano equivalente al Tribunal de Revisión de Actos Administrativos. En la mayoría de los Estados se han dictado leyes sobre libertad de información, y en cada uno de ellos existe un ombudsman.

204. El Tribunal de Revisión de Actos Administrativos, creado por la ley respectiva de 1975, es un órgano independiente cuya función es la revisión de las resoluciones de los ministros, autoridades y funcionarios del Gobierno Federal dictadas en virtud de más de 200 leyes del Parlamento Federal. El Tribunal está facultado para sustituir lo resuelto por su propia decisión en las materias en que tiene jurisdicción, que incluyen la seguridad social, la materia impositiva, los derechos de aduana y los beneficios para ex combatientes. Ocasionalmente se disponen agregados a la jurisdicción del Tribunal. El Consejo de Revisión de Actos Administrativos también fue creado por la Ley sobre el Tribunal de Revisión de Actos Administrativos. Sus principales funciones consisten en formular recomendaciones al Fiscal General sobre cuestiones de derecho administrativo en general y, en especial, sobre los recursos contra los actos administrativos y los procedimientos ante los tribunales administrativos.

205. La Ley sobre Resoluciones Administrativas (Revisión Judicial) de 1977 establece la revisión judicial, a cargo del Tribunal Federal de Australia, de los actos administrativos dictados en virtud de leyes federales. Cuando un interesado recurre solicitando la revisión de un acto administrativo, el Tribunal está facultado para examinar su licitud, el procedimiento que condujo a su aprobación, o las circunstancias de los casos en que se ha omitido dictarla. La Ley establece los fundamentos por los que puede solicitarse la revisión y las facultades del Tribunal. En la mayor parte de los casos, la persona que tiene derecho a solicitar la revisión judicial de una decisión administrativa puede obtener la expresión de los fundamentos de la autoridad que la dictó.

206. La Ley sobre Libertad de Información de 1982 tiene los siguientes objetivos:

a) Hacer que el público pueda obtener informaciones sobre las normas, prácticas y funcionamiento de los departamentos y autoridades del Gobierno de Australia;

b) Crear un derecho general de acceso a la documentación que se encuentra en posesión de los ministerios y organismos oficiales;

c) Permitir a toda persona exigir que se rectifique cualquier expediente administrativo en el que existan informaciones inexactas o incompletas acerca de sus asuntos personales.

Para lograr estos objetivos, la Ley determina los derechos del público en cuanto al acceso a la documentación y establece múltiples obligaciones y restricciones a los departamentos de la administración y al público en cuanto al ejercicio de esos derechos.

207. El derecho de acceso no alcanza a todos los documentos ni a todos los organismos oficiales. Entre los documentos exceptuados figuran los que afectan a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones internacionales y las relaciones entre los Estados, los documentos del Gabinete y del Consejo Ejecutivo, los documentos de trabajo internos cuya divulgación pudiera ser contraria al interés público y los documentos que afecten a la aplicación de la ley y la protección de la seguridad pública.

208. Entre los organismos que están exonerados totalmente o en relación con determinadas actividades figuran los de inteligencia de seguridad y aquellos que se dedican totalmente a actividades comerciales en competencia con el sector privado.

209. Todos los Estados y el Territorio de la Capital de Australia tienen leyes sobre libertad de información.

210. La Oficina del Ombudsman del Commonwealth fue creada por la Ley sobre el Ombudsman de 1976 para investigar denuncias sobre los actos administrativos de todos los departamentos del Gobierno del Commonwealth y de los demás organismos del Commonwealth que se indican a ese efecto en la Ley citada. Además de investigar denuncias, el Ombudsman puede investigar asuntos por su propia iniciativa.

211. Además de esta función general, el Ombudsman desempeña funciones especiales:

a) Actuar como Ombudsman de las Fuerzas Armadas e investigar cuestiones relativas al servicio en las Fuerzas Armadas de Australia (conforme a la enmienda de 1983 de la Ley sobre el Ombudsman);

b) Investigar denuncias contra la Policía Federal de Australia (de conformidad con la Ley sobre Denuncias (Policía Federal de Australia) de 1981);

c) Investigar denuncias referentes de la Ley sobre Libertad de Información de 1982 (de conformidad con esta última Ley);

d) Fiscalizar e informar sobre el registro de interceptaciones de comunicaciones llevadas a cabo por los órganos de aplicación de la ley del Commonwealth (conforme a la Ley sobre Telecomunicaciones (Intercepción) de 1979).

212. Aunque la mayor parte de las investigaciones se llevan a cabo con formalidades mínimas, el Ombudsman tiene amplias facultades al realizar sus investigaciones para disponer la presentación de documentos e informaciones o

disponer que las personas concurren e informen. El Ombudsman está facultado para denegar la investigación de una denuncia o poner fin a su realización cuando el asunto pueda ser tratado por otro órgano, o por otras diversas razones. Después de completada una investigación, el Ombudsman puede declarar que la medida impugnada era injustificada, ilegal, injusta, opresiva, indebidamente discriminatoria, fundada en error o equivocada. Puede declarar que la medida se adoptó conforme a las normas pero que éstas últimas eran en sí mismas injustificadas, injustas, opresivas o inadecuadamente discriminatorias.

213. Si el Ombudsman llega a tal conclusión, y estima que debe adoptarse alguna medida para la rectificación del problema, debe informar al departamento u organismo competente y recomendar las medidas que a su juicio deban adoptarse. Si no se acepta su recomendación, el Ombudsman puede dar cuenta al Primer Ministro y al Parlamento. Son relativamente pocos los casos que dan objeto a informes formales a los departamentos u organismos oficiales, aún menos los informes dirigidos al Primer Ministro, y los informes al Parlamento son sumamente excepcionales.

214. El Ombudsman tiene oficinas en todos los Estados continentales y el Territorio de la Capital de Australia. En Tasmania y el Territorio del Norte, el Ombudsman del Commonwealth está representado por el Ombudsman del Estado y del Territorio, respectivamente.

215. Todos los Estados de Australia, el Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte han dictado leyes que establecen una oficina para el cumplimiento de funciones análogas a las que desempeña el Ombudsman del Commonwealth en su esfera. Esos órganos tienen diversas denominaciones.

216. Existen en la esfera federal otros diversos tribunales especializados para la revisión de actos administrativos, como por ejemplo el Tribunal de Recursos sobre Inmigración, y que examinan el mérito de los actos administrativos en determinadas esferas como los asuntos de los ex combatientes, la seguridad social y las migraciones. Respecto de muchas de esas decisiones también puede entablarse recurso ante el Ombudsman, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidad y el Tribunal Federal, en virtud de la Ley sobre Resoluciones Administrativas (Revisión Judicial).

217. Tanto el Commonwealth como los Estados tienen leyes propias sobre las relaciones de trabajo y tribunales laborales independientes. La Comisión Federal de Relaciones Laborales, creada por la Ley de Relaciones Laborales de 1988, es el tribunal más importante de Australia en materia de determinación de las condiciones de trabajo. Tiene facultades decisorias de conciliación y arbitraje para prevenir y resolver ciertos litigios laborales.

218. Los salarios mínimos legales correspondientes a un 80% de los trabajadores australianos, aproximadamente, están fijados por laudos arbitrales o sentencias de tribunales laborales federales y de los Estados, cuya obligatoriedad tiene respaldo legal. Por lo general, esas normas sólo fijan salarios mínimos y otras condiciones mínimas. Al determinar salarios mínimos, los tribunales toman en consideración los valores comparativos del trabajo y tienen en cuenta el trabajo cumplido y las condiciones en que se desarrolla.

219. El Primer Ministro ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para asegurar salarios mínimos y otras condiciones de trabajo a todos los australianos.

220. La Comisión Federal también está facultada para conocer y resolver en solicitudes referentes al registro, la fusión y la eliminación del registro de organizaciones gremiales. El registro para las organizaciones de empleadores y trabajadores no es obligatorio conforme a la Ley y las diversas leyes de los Estados, pero es necesario para la plena participación en el sistema de relaciones laborales instituido por la Ley. Las organizaciones no registradas, sin embargo, pueden representar y efectivamente representan los intereses laborales de sus afiliados al margen del sistema creado por la Ley.

221. La Comisión Federal debe tener en cuenta los principios incorporados en la Ley sobre la Discriminación Racial de 1978 y la Ley sobre la Discriminación por Razones de Sexo de 1984 en las cuestiones relativas al empleo, y los respectivos Comisionados sobre Discriminación pueden ser autorizados para intervenir en cualquier controversia sometida a la Comisión.

222. Los Gobiernos de Australia han creado en diversas oportunidades Comisiones Reales para investigar e informar sobre cuestiones de interés público. La última de las Comisiones Reales sobre un tema de importancia para los derechos humanos fue la Comisión Real sobre las Muertes en Detención de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (1987/89).

E. Instituciones especializadas sobre derechos humanos

1. Legislación federal sobre derechos humanos

223. Las principales leyes federales destinadas directamente a la protección de los derechos humanos son las siguientes:

a) La Ley sobre la Discriminación Racial de 1975, destinada a aplicar la mayor parte de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial que afectan al goce de los derechos humanos, incluyendo la disposición que hace ilícita la discriminación racial en determinadas esferas como el empleo, la enseñanza y el suministro de bienes y servicios.

b) La Ley sobre la Discriminación por Razones de Sexo de 1984, destinada a aplicar la mayor parte de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta Ley prohíbe la discriminación por razones de sexo, estado civil y embarazo en la administración de las leyes y programas federales y en ciertas esferas particulares que comprenden el trabajo, el alojamiento, la enseñanza, el suministro de bienes, locales y servicios, la enajenación de inmuebles y las actividades de los clubes. La Ley también procura el objetivo de eliminar, en la medida de lo posible, las discriminaciones que suponen hostigamiento sexual en los lugares de trabajo y las instituciones de enseñanza y la promoción, en la comunidad, del reconocimiento y la aceptación del principio de la igualdad de hombres y mujeres.

c) La Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de 1986, que creó la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y le asignó ciertas funciones (véase más adelante) mediante referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación de 1958 (Convenio N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración sobre la

eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. El Fiscal General también puede declarar la aplicabilidad de la Ley a otros instrumentos internacionales. Se han efectuado tales declaraciones en enero de 1993 respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño y en febrero de 1993 respecto de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.

d) La Ley sobre la Protección de la Vida Privada de 1988, que da aplicación más particular al derecho a la vida privada reconocido en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y desarrolla ese derecho en forma más detallada mediante referencia a las Directrices sobre la Protección de la Vida Privada y las Corrientes Transfronterizas de Datos Personales, elaboradas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

e) La Ley sobre la Discriminación por Discapacidad de 1992, que declara ilícita la discriminación contra las personas impedidas en ciertas circunstancias. La Ley declara ilícita la discriminación fundada en la discapacidad en las esferas del trabajo, la enseñanza, el suministro de bienes, servicios y locales, el alojamiento, la enajenación de inmuebles, las actividades de los clubes, los deportes, la administración de las leyes y programas federales y las solicitudes de información. También se declara ilícito el hostigamiento de cualquier persona por razones de discapacidad.

224. La Ley sobre la Discriminación Racial, la Ley sobre la Discriminación por Razones de Sexo y la Ley sobre la Discriminación por Discapacidad, de conformidad con las definiciones aprobadas en los instrumentos internacionales respectivos, establecen que no son ilícitas ciertas medidas especiales adoptadas para asegurar la igualdad en el goce o ejercicio de los derechos humanos por determinados grupos raciales, personas impedidas y mujeres.

225. En la administración pública federal han existido durante varios años programas de medidas positivas que se vieron fortalecidos con la aprobación, en 1987, de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades de Empleo (Autoridades del Commonwealth). En 1986, el Gobierno de Australia aprobó la Ley de Medidas Positivas (Igualdad de Oportunidades de Empleo para la Mujer), que obliga a las empresas con 100 o más empleados a establecer programas de medidas positivas en favor de la mujer. Esos programas deben evaluar la política y las prácticas del empleador para evitar las discriminaciones contra las empleadas de sexo femenino, determinar las pautas estadísticas o de otro tipo sobre discriminación contra las trabajadoras y establecer metas para el logro de la igualdad de oportunidades de empleo para la mujer. Deben elaborarse informes anuales públicos acerca de los programas. Se ha designado a un Director de Medidas Positivas para fiscalizar los programas y examinar la eficacia de la ley.

2. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades

226. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades es una autoridad independiente y permanente, creada por la ley, con responsabilidades respecto de la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de 1986, la Ley sobre la Discriminación Racial de 1975, la Ley sobre la Discriminación por Razones de Sexo de 1984 y la Ley sobre la Discriminación por Discapacidad de 1992. La Comisión también presta asistencia al Comisionado sobre Protección de la Vida Privada en la administración de la Ley sobre la Protección de la Vida Privada de 1988.

227. La Comisión está formada por un Presidente, que actúa en régimen de dedicación parcial (en la actualidad un ex juez del Tribunal Superior de Australia) y seis Comisionados en dedicación exclusiva. Son los siguientes:

El Comisionado sobre Derechos Humanos (que es jefe ejecutivo de la Comisión);

El Comisionado sobre Discriminación Racial;

El Comisionado sobre Discriminación por Razones de Sexo;

El Comisionado sobre Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres;

El Comisionado sobre Discriminación por Discapacidad; y

El Comisionado sobre Protección de la Vida Privada.

228. La sede nacional está situada en Sydney. En la mayoría de los Estados que tienen sus propias leyes contra la discriminación se han concertado acuerdos de colaboración por la Comisión Federal, en virtud de los cuales las autoridades de los Estados actúan como agentes de ella o bien ésta actúa como agente de las autoridades de los Estados. En Tasmania, donde no se ha dictado una ley contra la discriminación, la Comisión Federal tiene una oficina regional para asegurar que la protección de los derechos humanos garantizados por las leyes federales alcance a todos los australianos.

229. Como institución independiente creada por la ley, la Comisión no está sujeta a la autoridad del Gobierno en el desempeño de sus funciones.

230. Las funciones de la Comisión en relación de los derechos humanos figuran en el artículo 11 de la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Esas funciones comprenden la facultad de atender denuncias, así como amplias funciones de promoción y política general, entre ellas las siguientes:

a) Realizar programas de investigación, enseñanza y otros para fomentar la aceptación, comprensión y conciencia pública de los derechos humanos;

b) Examinar las leyes vigentes y, cuando lo solicite el Fiscal General, los proyectos de leyes, en cuanto a su compatibilidad con los derechos humanos;

c) Informar al Parlamento sobre las leyes que debieran dictarse u otras medidas que corresponda adoptar en relación con los derechos humanos a fin de que Australia cumpla sus obligaciones internacionales en la materia;

d) Examinar las actividades o prácticas de las autoridades federales y los actos cumplidos en virtud de las leyes federales para verificar su compatibilidad con los derechos humanos.

Los "derechos humanos" se definen como aquellos derechos que se enuncian en los diversos instrumentos indicados en la Ley o que figuran anexos a ella.

231. La Comisión está facultada para tentar la conciliación respecto de las denuncias sobre derechos humanos contra autoridades federales, e informar al Fiscal General si no puede lograrse tal solución.

232. En virtud de la Ley sobre la Discriminación por Razones de Sexo, la Ley sobre la Discriminación Racial y la Ley sobre la Discriminación por Discapacidad, la Comisión tiene funciones de promoción, de enseñanza y política general en relación con esas formas de discriminación, que son similares en términos generales a las que desempeña sobre otras cuestiones de derechos humanos en virtud de la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Además, el Comisionado sobre Discriminación Racial debe preparar anualmente un "Informe sobre el estado de la Nación" acerca de la situación de los australianos originarios de medios que no son de habla inglesa. Sin embargo, las funciones y facultades que estas tres leyes otorgan en materia de denuncias son considerablemente mayores. Aunque las denuncias referentes a derechos humanos están limitadas a las que se refieren a organismos del Gobierno Federal, la Ley sobre la Discriminación Racial y la Ley sobre la Discriminación por Discapacidad se aplican a los actos de discriminación de cualquier órgano o persona. La Ley sobre la Discriminación por Razones de Sexo se aplica a los particulares, las empresas y las autoridades federales, así como a los gobiernos de los Estados, salvo en materia de trabajo.

233. Los Comisionados sobre Discriminación por Razones de Sexo, Discriminación Racial y Discriminación por Discapacidad están facultados para tentar la conciliación entre el denunciante y el presunto autor de actos discriminatorios. Si no puede alcanzarse una solución satisfactoria para ambas partes, el asunto puede ser objeto de una audiencia de la Comisión. Esta puede formular declaraciones sobre la existencia de discriminación y proponer diversas formas de reparación que no se limitan a la indemnización económica. La forma de ejecución de las decisiones de la Comisión varía según el responsable. Sus órdenes son directamente obligatorias cuando el responsable es un departamento o institución del Gobierno Federal. En los demás casos, se registran ante el Tribunal Federal y adquieren la eficacia de las sentencias de éste a menos que se interponga un recurso ante el Tribunal dentro de determinado plazo.

234. De conformidad con el artículo 31 de la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, la Comisión también tiene cometidos en relación con la discriminación en el empleo sobre la base del Convenio N° 111 de la OIT. En esta materia, la jurisdicción de la Comisión no está limitada a los asuntos federales, sino que se extiende a los asuntos de trabajo en toda Australia.

235. Las causas de discriminación abarcadas por esta disposición comprenden las mencionadas en el Convenio -es decir, raza, color, sexo, religión, opinión política, origen nacional o social- junto con otras varias causas agregadas en 1989 por un reglamento del Gobierno Federal. Son las siguientes: la edad, los antecedentes clínicos, los antecedentes penales, los impedimentos físicos (incluida la infección de VIH), la incapacidad física, mental, intelectual o siquiátrica, el estado civil, la nacionalidad, la preferencia sexual, la actividad sindical o la existencia anterior o supuesta de cualquiera de estas causas. La Comisión puede tentar la conciliación en los casos de denuncia en estas materias. Si el asunto no puede ser resuelto por conciliación, puede dar lugar a un informe al Fiscal General. No existen procedimientos formales de decisión ni de ejecución.

236. Una de las facultades más importantes y originales atribuidas a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades es la de llevar a cabo encuestas públicas sobre cuestiones de derechos humanos. Permiten colocar grandes temas de derechos humanos de Australia en un centro de atención política y pública.

La Comisión ha realizado diversas encuestas sobre temas de interés nacional, entre ellas las siguientes:

Encuesta Nacional sobre los Derechos Humanos y las Enfermedades Mentales;

Encuesta sobre los Niños sin Hogar;

Encuesta Nacional sobre la Violencia Racista;

Encuesta sobre el Suministro de Servicios Médicos a las Comunidades Aborígenes de Cooktown, Wujal Wujal y Hopevale;

Encuesta sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas en el Territorio del Norte;

Encuesta sobre la posible discriminación por razones de sexo en los salarios superiores al mínimo.

237. A solicitud del Gobierno de Australia, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades desempeña una importante función internacional. La Comisión efectúa aportes a los informes periódicos de Australia conforme a los diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos. También ha participado, integrando delegaciones del Gobierno de Australia, en el desarrollo de instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño, los Principios y Garantías para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental y las Normas Uniformes sobre la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.

238. A solicitud del Gobierno, la Comisión ha participado igualmente en otras actividades de las Naciones Unidas como el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión participó, presentando un importante documento, en la Segunda Reunión Técnica Internacional sobre las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Diversos países, entre ellos la Federación de Rusia, la India, Indonesia y Tailandia, han expresado recientemente su interés acerca de la Comisión australiana como posible modelo para la creación de sus propias instituciones independientes.

3. El Comisionado sobre Protección de la Vida Privada

239. El Comisionado sobre Protección de la Vida Privada es un miembro de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, aunque el cargo fue creado separadamente por la Ley sobre la Protección de la Vida Privada de 1988, que le asignó sus funciones. Esta Ley trata de la protección del carácter privado de la información personal en poder de organismos del Gobierno Federal. Las normas impuestas a los organismos del Gobierno Federal están determinadas en los Principios sobre el Carácter Privado de la Información, que figuran en la Ley. Esos Principios se basan en directrices de la OCDE y establecen normas básicas para la obtención, almacenamiento, utilización y divulgación de informaciones personales por las instituciones públicas.

240. La Ley establece también un régimen de reglamentación para proteger el carácter privado de los "números de expedientes impositivos", que son números exclusivos de identificación utilizados en el sistema impositivo. La Ley atribuye al Comisionado sobre Protección de la Vida Privada, entre otras

facultades, la de expedir directrices acerca de la obtención, almacenamiento, utilización y seguridad de los números de expedientes impositivos, y de investigar los actos y prácticas que pueden suponer su divulgación no autorizada. Las directrices sobre los números de expedientes impositivos son análogas a los Principios sobre el Carácter Privado de la Información y no se limitan a la reglamentación aplicable a los organismos del Gobierno Federal, sino que se aplican también a integrantes del sector privado como los agentes impositivos, los empleadores y los abogados.

241. La Ley sobre la Protección de la Vida Privada establece un régimen reglamentario similar para la utilización y divulgación de información personal por las instituciones de evaluación del crédito. Las instituciones de evaluación del crédito poseen detalles sobre la solvencia de las personas y suministran esa información a los organismos de crédito que la solicitan. El Comisionado sobre Protección de la Vida Privada ha expedido un Código de Conducta aplicable en materia de crédito.

242. El Comisionado sobre Protección de la Vida Privada ha desarrollado igualmente Directrices para la Confrontación de Datos en la Administración Federal para la mejor fiscalización y utilización de esos programas y sus resultados en los organismos gubernamentales. El Comisionado sobre Protección de la Vida Privada está facultado también para aplicar salvaguardas a la utilización y divulgación de informaciones sobre las penas cumplidas, de conformidad con la Ley sobre los Delitos de 1914.

243. Entre las funciones más generales del Comisionado sobre Protección de la Vida Privada en relación con el carácter privado de las informaciones personales en poder de organismos del Gobierno Federal figura la de examinar los proyectos de leyes federales por los que se autoricen medidas susceptibles de vulnerar la vida privada, respecto de los cuales el Comisionado está facultado para informar al Parlamento. Cuando el Comisionado establece que se ha producido una violación de las Directrices sobre los Números de Expedientes Impositivos o los Principios sobre el Carácter Privado de las Informaciones, puede tentar la conciliación entre las partes interesadas o efectuar una investigación y, sobre la base de sus resultados, dictar una decisión que puede incluir una indemnización por los perjuicios causados por la violación. Esas decisiones pueden ejecutarse, si es preciso, por demanda ante el Tribunal Federal promovida por el Comisionados sobre Protección de la Vida Privada.

244. El Comisionado sobre Protección de la Vida Privada fiscaliza sistemáticamente el grado de cumplimiento de la Ley sobre la Protección de la Vida Privada por los organismos gubernamentales, las instituciones de evaluación del crédito, las instituciones de crédito y los usuarios de números de expedientes impositivos.

4. La Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres y el Comisionado de Justicia Social

245. El 5 de marzo de 1990, el Gobierno de Australia estableció por ley la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. La Comisión está formada por 20 Comisionados, todos ellos aborígenes o isleños del Estrecho de Torres, y 60 Consejos Regionales. Todos los miembros de los Consejos Regionales son electos por los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. La Comisión responde ante el Parlamento y ante los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres de Australia.

246. La Comisión es el principal órgano normativo en materia de asuntos de los aborígenes. Representa una asociación entre representantes electos de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, la estructura administrativa y el Ministerio de Asuntos de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. Un aspecto importante de la estructura de la Comisión es que estimula a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres a participar en las actividades de gobierno. De este modo se impulsa a la población indígena a adoptar decisiones sobre los programas y las medidas que les afectan.

247. La Comisión administra diversos programas tendientes a impulsar el adelanto social de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Esos programas se refieren a infraestructura y viviendas comunitarias, préstamos para viviendas, salud, abuso de drogas, apoyo al desarrollo comunitario, actividades recreativas y deportivas, y el orden público y la justicia. La Comisión también administra diversos programas de empleo para promover la independencia económica de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres mediante la creación de oportunidades de trabajo y de capacitación.

248. Asimismo, la Comisión adquiere bienes por cuenta de empresas de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y adopta medidas administrativas para asegurar el derecho de propiedad de las comunidades indígenas respecto de sus tierras. También colabora en la preservación, protección y promoción de la cultura de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres mediante la protección de su patrimonio, su arte y su cultura, y programas de radiodifusión y comunicaciones.

249. La Oficina para las Mujeres Indígenas, dependiente de la Comisión, asegura una perspectiva particular en nombre de las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres.

250. La Comisión asume una función positiva en temas internacionales de interés para la población indígena. Se mantiene en vinculación estrecha con organizaciones no gubernamentales de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres para promover sus perspectivas propias en asuntos sociales, económicos y culturales en foros internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas.

251. Como consecuencia del reciente informe de la Comisión Real sobre las Muertes de Aborígenes en Detención, el Gobierno Federal convino en crear el cargo de Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, dentro de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. La principal responsabilidad del nuevo Comisionado es preparar anualmente, para el Gobierno Federal, un "Informe sobre el estado de la Nación" acerca del disfrute y el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales por los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y las medidas necesarias para asegurarles el pleno goce, en igualdad de condiciones, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

5. Oficina de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

252. La Oficina de la Condición Jurídica y Social de la Mujer forma parte del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete. Tiene por función desarrollar y supervisar la política y administrar los programas que se refieren a la situación de la mujer en Australia y ayudar a mejorarla mediante programas y medidas que den seguridad e independencia a la mujer, le pongan a resguardo de la discriminación y la violencia y le aseguren la igualdad de oportunidades.

253. La política oficial en materia de situación de la mujer figura en el Programa Nacional para la Mujer, desarrollado por la Oficina después de amplias consultas con mujeres en toda Australia y publicado en 1987. A comienzos de 1993 se dio a conocer una nueva versión actualizada del Programa Nacional, con Acción para el Futuro destinada al año 2000.

254. Son ejemplos de algunas esferas específicas en que la Oficina ha asumido una función destacada de promoción el desarrollo de la Política Nacional para la Educación de las Niñas en las Escuelas de Australia (artículo 10 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), la Política Nacional de Salud Femenina (artículo 12), la creación del Grupo de Trabajo Nacional sobre la Presentación de la Mujer en los Medios de Difusión (artículo 5), la creación del Comité Nacional sobre la Violencia contra la Mujer y el posterior desarrollo de una Estrategia Nacional sobre la Violencia contra la Mujer (artículo 5), la responsabilidad por los programas de educación comunitaria en relación con los trabajadores con cargas familiares, tras la ratificación por Australia del Convenio N° 156 de la OIT (artículo 11) y las medidas y programas sobre atención del niño, que se refieren a la aplicación de diversos artículos.

255. La Oficina publica y difunde diversas informaciones sobre estas y otras cuestiones, incluyendo informaciones sobre tratados internacionales relativos a la condición jurídica y social de la mujer. Entre ellas ha figurado una guía de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y cuestiones como las referentes a la necesidad de la Convención, su contenido y su funcionamiento. Se está elaborando actualmente una carpeta informativa sobre la Convención, junto con el Consejo Consultivo Nacional de la Mujer.

6. Oficina de Asuntos Multiculturales

256. La Oficina de Asuntos Multiculturales también forma parte del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete. La Oficina se ocupa de que el Primer Ministro, y por su intermedio todo el Gabinete, reciban asesoramiento sobre las consecuencias de todas las decisiones gubernamentales en el entorno multicultural. Las funciones de la Oficina incluyen las siguientes:

- a) Asesorar al Primer Ministro y a todo el Gobierno;
- b) Examinar las propuestas formuladas por todos los sectores del Gobierno a fin de evaluar sus efectos en la sociedad multicultural australiana;
- c) Fiscalizar y coordinar la aplicación de la Estrategia del Gobierno sobre Acceso e Igualdad, que procura asegurar a todos los australianos, incluida la población originaria de medios que no son de habla inglesa, el disfrute de la igualdad de acceso y la participación equitativa en los principales programas y servicios oficiales;
- d) Elaborar mecanismos eficaces de enlace y consulta con la comunidad en general, incluidas las comunidades étnicas;
- e) Promover investigaciones sobre esferas fundamentales para el desarrollo de la política y los programas;
- f) Promover una comprensión más amplia de la comunidad acerca del multiculturalismo.

F. Leyes de los Estados y Territorios contra la discriminación y para la igualdad de oportunidades

257. En Nueva Gales del Sur, Queensland, Victoria, Australia del Sur, Australia Occidental y el Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte también se han dictado leyes contra la discriminación. No existe ninguna ley de ese tipo en la jurisdicción de Tasmania.

258. Las leyes federales sobre derechos humanos rigen en toda Australia, y existen algunas esferas en que se superponen con leyes de los Estados y Territorios. Esto ha originado algunos problemas en el pasado cuando las leyes de los Estados fueron anuladas por el Tribunal Superior por su incompatibilidad con leyes federales referentes a los mismos temas. El problema quedó resuelto mediante la inclusión en las leyes federales de disposiciones que preservan específicamente la validez de las leyes de los Estados.

259. Las leyes federales disponen también que cuando una persona haya formulado una denuncia sobre determinado asunto fundándose en la ley aplicable del Estado o Territorio, no podrá formular también una denuncia basada en la legislación federal.

260. En diversos Estados rigen leyes que establecen una protección contra la discriminación que incluye mayor número de causas que las prohibidas actualmente por la legislación federal, o que en ésta sólo dan lugar a una protección limitada. Por ejemplo, la ley contra la discriminación del Territorio de la Capital de Australia prohíbe la discriminación por las siguientes causas que no están previstas en la legislación federal: la sexualidad, la transsexualidad, las convicciones religiosas o políticas y la vinculación con personas que se identifican con alguno de esos atributos.

G. Organizaciones no gubernamentales

261. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel activo e importante en la promoción y protección de los derechos humanos en Australia. Existe gran número de tales instituciones en Australia, y muchas de ellas actúan como grupos de presión que presentan iniciativas a los gobiernos en los temas de su interés especial. Algunos de esos organismos han recibido financiación del Gobierno para ayudarles en sus trabajos. La Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres presta apoyo a organizaciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones de la población indígena, por ejemplo financiando los gastos de su concurrencia a los foros de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades tiene el cometido específico de trabajar con las organizaciones no gubernamentales y en consulta con ellas para el desempeño de sus funciones.

H. Mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos

262. El Gobierno de Australia reconoce el valor de los mecanismos de las Naciones Unidas para complementar las disposiciones internas en materia de derechos humanos y ha expresado su compromiso de cumplir sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos autorizando la fiscalización de su desempeño en la materia a través de los procedimientos que siguen.

263. Australia se adhirió al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 25 de septiembre de 1991, después de prolongadas consultas con los gobiernos de los Estados y Territorios. La adhesión al

Protocolo Facultativo fue una de las recomendaciones de la Comisión Real sobre las Muertes de Aborígenes en Detención. El Protocolo Facultativo entró en vigor respecto de Australia el 25 de diciembre de 1991. El procedimiento previsto en él permite que los individuos efectúen comunicaciones al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre presuntas violaciones cometidas por Australia de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siempre que se hayan agotado todos los recursos que ofrece la legislación interna.

264. El 28 de enero de 1993, Australia depositó en las Naciones Unidas declaraciones referentes a los siguientes instrumentos sobre derechos humanos:

a) Artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La declaración prevista en este artículo permite que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial reciba y examine comunicaciones de individuos u organizaciones de individuos relativas a denuncias de discriminación racial cometidas por Australia, siempre que se hayan agotado los recursos internos.

b) Artículo 22 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La declaración prevista en este artículo permite que el Comité contra la Tortura reciba y examine comunicaciones de individuos acerca de presuntas violaciones de la Convención contra la Tortura cometidas por Australia, siempre que se hayan agotado todos los recursos internos.

c) Artículo 21 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La declaración prevista en este artículo permite que el Comité contra la Tortura reciba y examine comunicaciones de otros Estados Partes relativas a presuntas violaciones de la Convención contra la Tortura cometidas por Australia. Tales comunicaciones sólo pueden efectuarse por un Estado Parte que haya realizado la misma declaración.

d) Artículo 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La declaración prevista en este artículo permite que el Comité de Derechos Humanos reciba y examine comunicaciones de otros Estados partes relativas a presuntas violaciones del Pacto cometidas por Australia. Tales comunicaciones sólo pueden efectuarse por un Estado parte que haya realizado la misma declaración.

Las declaraciones surten efectos inmediatos.

IV. INFORMACION Y PUBLICIDAD

A. Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades

265. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades tiene dos objetivos principales:

a) Fomentar la comprensión, la aceptación y la observancia de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en Australia;

b) Promover una sociedad más justa protegiendo los derechos humanos básicos y asegurando el cumplimiento por Australia de sus obligaciones en materia de derechos humanos conforme al derecho internacional.

266. Conforme a su cometido de fomentar la comprensión, la aceptación y la observancia de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en Australia, la Comisión desarrolla una permanente función educativa. El Presidente, los Comisionados y el personal se dirigen frecuentemente a encuentros que van desde pequeños grupos de organizaciones especializadas hasta grandes conferencias. La Comisión sigue recurriendo a formas originales de concentrar la atención pública en temas de derechos humanos, que incluyen el otorgamiento anual de los Premios de Derechos Humanos (véase más adelante) y la participación en exposiciones públicas.

267. La Comisión tiene una dependencia de medios de difusión y una dependencia de educación y promoción para impulsar la conciencia del público sobre temas de derechos humanos y asegurar que los medios de difusión estén adecuadamente informados al ocuparse de ellos. La Comisión cuenta también con un programa de publicaciones a fin de que sus informes, folletos y monografías ocasionales se publiquen y difundan en la medida que permitan los recursos.

268. En los últimos tiempos, el trabajo de educación de la comunidad cumplido por la Comisión se ha concentrado cada vez más en reducir las prácticas discriminatorias en los lugares de trabajo, ayudando a los empleadores a cumplir sus obligaciones en virtud de las leyes contra la discriminación y, de ese modo, las obligaciones internacionales del país. Las encuestas públicas que lleva a cabo la Comisión también contribuyen a destacar grandes temas de derechos humanos en Australia.

269. Una importante actividad de promoción que cumple la Comisión es el otorgamiento anual de la Medalla y los Premios de Derechos Humanos en la Semana de los Derechos Humanos, creada en 1987 para expresar el reconocimiento a los australianos que han hecho una contribución importante a los derechos humanos en el país. Los Premios de Derechos Humanos recompensan la promoción de la comprensión y el análisis públicos de los derechos humanos en Australia, en la comunidad y a través de los medios de difusión y diversas manifestaciones artísticas.

B. Formulación de informes

270. Los siguientes organismos gubernamentales tienen a su cargo la elaboración de los informes que corresponden en virtud de los principales instrumentos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos:

<u>Instrumento internacional</u>	<u>Organismo gubernamental responsable</u>
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	Departamento del Fiscal General
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial	Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer	Departamento del Primer Ministro y el Gabinete - Oficina de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes

Departamento del Fiscal General

Convención sobre los Derechos del
Niño

Departamento del Fiscal General

271. El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional tiene a su cargo la presentación de los informes a los diversos organismos creados por los tratados. Para su preparación, los organismos gubernamentales efectúan amplias consultas con otras instituciones oficiales federales y de los Estados y Territorios. Recientemente se han hecho esfuerzos para consultar también a las organizaciones no gubernamentales interesadas.

272. Para que los informes de Australia sean completos, resulta necesario ofrecer informaciones sobre las nueve jurisdicciones que componen el país. Ello supone una actividad sumamente laboriosa a nivel federal y de los Estados. La consulta con las organizaciones no gubernamentales durante la elaboración de los informes también resulta conveniente, pero también supone la dedicación de abundantes recursos. Estos factores han provocado ciertas demoras en la presentación de algunos informes a los organismos creados por los tratados sobre derechos humanos.

273. Para resolver estos problemas se ha recurrido a diversas estrategias. Por ejemplo, en la preparación del segundo informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Oficina de la Condición Jurídica y Social de la Mujer prestó apoyo financiero a los Estados y Territorios para que pudiesen ayudarle a compilar materiales y presentarlos adecuadamente. A nivel del Commonwealth, la preparación se vio facilitada por la supervisión anual de las medidas y programas para la mujer que se cumple a través del Presupuesto para la Mujer y el Informe sobre el Cumplimiento del Programa Nacional.

274. La preparación de los informes ofrece a cada una de las jurisdicciones una oportunidad para examinar las medidas que se han adoptado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Australia. Se alienta a los Estados y Territorios a que consulten a las organizaciones no gubernamentales locales en la preparación de sus aportes al informe definitivo.

275. Los informes preparados conforme a los diferentes tratados constituyen documentos públicos que pueden obtenerse mediante solicitud de los interesados. El segundo informe de Australia presentado conforme a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, completado en julio de 1992 y titulado "La mujer en Australia", recibió amplia publicidad y fue entregado personalmente por el Primer Ministro a la Presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Se encuentra en venta en las librerías del Servicio Editorial Oficial de Australia. Se ha distribuido a organizaciones no gubernamentales, bibliotecas, instituciones académicas y todas las representaciones de Australia en ultramar. Los futuros informes correspondientes a otros tratados se distribuirán también en la misma forma. Igualmente se está examinando la posibilidad de presentar los informes futuros al Parlamento.

C. Organismos de los Estados y Territorios contra la discriminación
y para la igualdad de oportunidades

276. Todos los organismos de los Estados y Territorios creados para la lucha contra la discriminación y en favor de la igualdad de oportunidades cuentan con programas de divulgación de informaciones para informar y educar a la comunidad sobre los derechos humanos y las leyes contra la discriminación y promover los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Entre esos programas figuran la realización de seminarios, conferencias y cursos, la realización de disertaciones, exposiciones y reuniones de capacitación, la publicación de datos e informes, los servicios de respuesta a consultas del público, la elaboración de directrices para los empleadores, los medios de difusión y otras organizaciones y otras múltiples actividades.

ANEXO

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS FEDERALES Y DE LOS ESTADOS
Y TERRITORIOS DE AUSTRALIA

Human Rights and Equal Opportunity Commission
(Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades)
Level 24, American Express Building
388 George Street
Sydney NSW 2000

GPO Box 5218
Sydney NSW 2001

Territorio de la Capital de Australia

ACT Human Rights Office
(Oficina de Derechos Humanos del Territorio de la Capital de Australia)
GPO Box 422
Canberra ACT 2601

Territorio del Norte

Human Rights and Equal Opportunity Commission
(Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades)
Regional Office
80 Mitchell Street
PO Box 363
West End 4101
Darwin NT 0800

(Locked Bag N° 4
Darwin NT 0801)

Nueva Gales del Sur

NSW Anti-Discrimination Board
(Junta contra la Discriminación de Nueva Gales del Sur)
Level 4
Australia Council Building
181 Lawson Street
Redfern NSW 2016

Queensland

Anti-Discrimination Commission
(Comisión contra la Discriminación)
187 Melbourne Street
South Brisbane Qld 4101

Australia del Sur

Equal Opportunity Commissioner
(Comisionado para la Igualdad de Oportunidades)
30 Wakefield Street
Adelaide SA 5000

Tasmania

Human Rights and Equal Opportunity Commission
(Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades)
Regional Office
Suite 4 Ground Floor
City Mill
11-13 Morrison Street
Hobart TAS 7000

Victoria

Equal Opportunity Commission
(Comisión para la Igualdad de Oportunidades)
4th Floor
356 Collins Street
Melbourne Vic 3000

Australia Occidental

Equal Opportunity Commissioner
(Comisionado para la Igualdad de Oportunidades)
5 Mill Street
Perth WA 6000
